

reparado

INDULTO REPARADOR

LOS REOS DE BENAGALBÓN

POR

PEDRO GÓMEZ CHAIX

EX-DIPUTADO A CORTES POR MÁLAGA



120

IMPRENTA DE EL POPULAR.—MÁLAGA.
Pozos Dulces, 31
1919

304



INDULTO REPARADOR

LOS REOS DE BENAGALBÓN

POR

PEDRO GÓMEZ CHAIX

EX-DIPUTADO A CORTES POR MÁLAGA



IMPRESA DE EL POPULAR.—MÁLAGA.
Pozos Dulces, 31
1919

EXHIBIT TO REPORT

LOS ANGELES DE BREVAGALBON

REPORT OF THE CHAIR

REPORT OF THE CHAIR

UNA CARTA

Sr. D. Pedro Gómez Chaix.

Mi querido amigo y compañero: He leído muy detenidamente sus cuatro notables artículos, en que, con vigorosa dialéctica y sólido fundamento legal y de doctrina, solicita el indulto de los reos de Benagalbón, como corolario y lógico complemento de la ley de amnistía.

No admite reparo alguno su labor luminosa, concienzuda y completa. Señala usted con precisión admirable los caracteres definidores del delito político, y los que especifican el de sedición. Con ferreo encadenamiento de ideas, a base de los principios de la moderna ciencia penal, de exactas citas legales y de supremas sentencias, formula y demuestra usted victoriosamente la tesis de que los reos de Benagalbón han podido quedar excluidos de la letra, pero no del espíritu de la ley de amnistía sancionada el 8 de Mayo actual.

Por el móvil, finalidad y forma de ejecución, fué colectivo, político y de sedición el delito cometido por aquellos exaltados ciudadanos. Verdad es que, en la calificación legal que sirvió de base a la condena se desintegraron los hechos, y así pudo castigarse el delito *específico*, aislado, de insulto y agresión a fuerza armada, definido en los artículos 253 y 254 del Código de Justicia Militar. Ahora bien: respetando el fallo, pues no se trata de la revisión de la causa, bastará apreciar en conjunto aquellos luctuosos hechos, las especiales circunstancias en que se realizaron y el móvil eminentemente político de sus autores, para justificar, en rigor de equidad, la necesidad imperiosa de un indulto reparador.

Y sin más, distinguido amigo, suscribo la petición y conclusiones de su documentado trabajo.

Muy sinceramente admiro y aplaudo el acierto y tenaz perseverancia con que año tras año labora usted por la libertad de tan honrados delincuentes.

Muy de veras le quiere

E. Menéndez Pallarés.

Madrid 31 de Mayo de 1918.



Por el indulto de los reos de Benagalbón

I

Sancionada la ley de amnistía en el día de ayer (1), anoche fueron puestos en libertad los sentenciados por los sucesos de Agosto último. El Gobierno ha cumplido así, en parte, el compromiso que contrajo con la opinión el 21 de Marzo, y por ello merece plácemes que nadie debe regatearle. Pero si el perdón concedido obliga lealmente a esta pública manifestación de gratitud por parte de cuantos militamos en las izquierdas, no hemos de ocultar también que al júbilo de éstas se mezcla cierta amargura, ya que el Gobierno primero y luego las Cortes han puesto singular empeño en restringir, en condicionar, en limitar una obra que pudo, sin duda, ser más amplia y generosa, de suerte que cabe afirmar que con la amnistía votada la misión del Gobierno no ha terminado en este punto, y tras lo hecho queda aún algo de suma importancia por hacer, si los ministros responsables que tomaron a su cargo hará pronto dos meses la tarea de devolver la paz y la tranquilidad a los espíritus, quieren de veras dar satisfactoria cima a tan noble y necesaria empresa, no tanto por altos sentimientos de piedad como por soberana e imperiosa exigencia de la justicia y de los propios principios que rigen la gobernación de los pueblos.

Recordemos, ante todo, los términos del mensaje que el presidente del Consejo de ministros presentó al Parlamento para justificar el proyecto de ley de amnistía. Dice así:

«A las Cortes: El Gobierno de Su Majestad no desconoce los inconvenientes de reiterar frecuentes amnistías; pero *el hecho ostensible de haberse generalizado la opinión favorable* a la que hoy somete a la deliberación de las Cortes, proviene de la singularidad de las

(1) Estos artículos dedicados al señor Conde de Romanones, a la sazón ministro de Gracia y Justicia, se publicaron en los números del diario *El Popular*, de Málaga, correspondientes a los días 10, 14, 17 y 19 de Mayo de 1918.

circunstancias, la cual se manifiesta también en la composición misma del Ministerio con cuya presidencia me honro.

Cuando la voz del patriotismo es en las conciencias tan imperativa, el Gobierno *nada quiere omitir que parezca adecuado para el aquietamiento de las pasiones políticas y la postergación de parcialidades y pugnas*. Pone su conato en servir abnegadamente la causa nacional, y anhela que todos los españoles cooperen al arduo empeño.»

Y si tales fueron las consideraciones y motivos que el Gobierno tuvo en cuenta para incorporar a su programa la amnistía, para hacerla base y fundamento esencial de su política, ¿puede, en buena lógica, una vez sentadas esas premisas de la parte expositiva de su proyecto, considerarse la finalidad del nuevo Gobierno cumplida con la concesión de una amnistía limitada a los autores de determinados y no todos los sucesos de Agosto? ¿Es que la opinión favorable a la clemencia no se ha generalizado para otros penados, por ejemplo, los del Numancia, Benagalbón y muchos más? ¿Es que no concurrió en los respectivos hechos análoga singularidad de circunstancias? ¿Es que el perdón de esos reos no se estima adecuado para el aquietamiento de las pasiones y la postergación de bandos y parcialidades?

Fíjese el Gobierno en sus declaraciones, fíjese en los precedentes y deduzca las consecuencias que no pueden menos de ser favorables a la ampliación de la amnistía mediante indultos parciales.

* * *

Se objeta que la ley de amnistía excluye a los reos de Benagalbón y otros como autores de un delito de insulto o agresión a la fuerza armada, delito que no comprenden las leyes de amnistía votadas en los últimos años; y alguien como el senador señor Ruíz Jiménez, movido de un exceso de ministerialismo, ha llegado a decir en la alta Cámara defendiendo el proyecto, que los delitos de esa clase no se incluyan en la amnistía, por que la fuerza armada es la única garantía que tienen los Gobiernos. Los malos Gobiernos, sí. Un Gobierno como el constituido en España el 21 de Marzo de 1918, que presume de fuerte, que se cree asistido de la confianza popular, no, no. Ni eso puede pasar sin protesta en un Cuerpo colegislador, ni un Consejo de ministros en que se hallan representados todos los partidos del régimen, puede asentir con su abstención o su silencio a que eso se eleve a la categoría de dogma consubstancial con esos partidos, los que desde 1909—antes no—excluyen sistemáticamente de todo proyecto de amnistía los delitos de agresión a la fuerza armada, cuando no los excluyeron los Gobiernos anteriores, cuando no los excluyó el mismo Cánovas a raíz de los mo-

vimientos revolucionarios de 1883, de 1885 y de 1886, en que militares y paisanos, indistintamente, fueron indultados de hechos de fuerza contra las instituciones armadas, hechos que tuvieron una trascendencia extraordinaria si se compara con la de tal o cual acto aislado.

Pero se dice que aquellos hechos de entonces eran políticos y los de ahora no. Políticos y sociales en el sentido lato de la palabra fueron unos y otros, los de entonces y los de ahora, por lo menos todos aquellos hechos, para cuyos autores pedimos indultos parciales, indultos tan reparadores social y políticamente como la misma amnistía.

Pues qué ¿cuándo en una conmoción popular, producida en el seno de las sociedades, se comete un delito, penado por los códigos civiles o militares, lo mismo en un caso que en otro, no deben apreciarse el origen, el ambiente, las circunstancias que lo rodean, los móviles en que hubo de inspirarse? ¿Porque sean las leyes militares y no las civiles las que castiguen, ha de proscribirse en el juicio y en la pena la tendencia moderna que aconseja la individualización, la especialización del delito? No puede compararse, jamás, nunca, sin agravio de la conciencia pública, el que delinque por defender un derecho político, como el de sufragio, o un ideal social o político, como el de huelga o el de un cambio de forma de gobierno, con el que delinque para saciar una venganza personal, para robar, etc.

Los que colaboramos en la campaña por el indulto de los reos de Benagalbón condenados a la última pena, no podremos olvidar nunca el magnífico fondo editorial inserto en el *Diario Universal*, de Madrid, el 17 de Mayo de 1915.

No fué extraña a aquel nobilísimo trabajo periodístico la inspiración de un conspicuo liberal que hoy puede influir poderosamente en la concesión que pretendemos.

En nombre del partido liberal nos dirigimos—decía *Diario Universal*—al Gobierno para suplicarle que proponga el ejercicio de la más augusta de las prerrogativas, y alegaba el referido periódico para ello razones de gran peso, en primer término y ante todo, el carácter pasional y colectivo de aquellos sucesos.

Así lo reconocía:

«El crimen, cometido por individuos, se engendró realmente en las entrañas de una muchedumbre. Es el resultado vituperable, pero acaso fatal, de un tumulto. ¿Cómo desconocer el impulso arrollador, la ceguedad ofuscada que el apasionamiento colectivo comunica a los seres más débiles espiritualmente, atenuando, ya que no suprimiendo, los espontaneidades de su albedrío, y, por consiguiente, su responsabilidad moral?»

«Tampoco es posible dejar de abrir los ojos ante la diferencia que

existe entre el que libremente, fríamente, con calculada saña, nacida de su íntima perversidad, medita y ejecuta el crimen, y el que en una atmósfera de pasión brutal y embrutecedora al mismo tiempo se despena en el crimen, que seguramente no hubiera cometido en otras circunstancias. Para el primero la responsabilidad es íntegra, y para el segundo la responsabilidad debiera estar compartida con la ineludible fatalidad.»

Y por si ese carácter pasional y colectivo del delito no bastase para atenuar la responsabilidad, el articulista todavía hacía resaltar otra circunstancia: el carácter electoral de la lucha que dió origen al mismo, y hasta las imperfecciones y *las iniquidades de un irregular funcionamiento político.*

Véase, si no, la preciosa confesión con que terminaba el trabajo a que aludimos:

«Hay en este caso, surgido en medio de un apasionamiento colectivo por una lucha electoral, más de barbarie que de maldad. Acaso la previsión de quienes, por más ilustrados y por colocados más alto, debieron ejercitarla, pudo haber evitado la ocasión del crimen. Acaso también en las complejas imperfecciones y aún en las posibles iniquidades de un funcionamiento político irregular se encuentre parte de las semillas que dieron tan horrible fruto.»

¿Puede, por quien las anteriores líneas lea, abrigarse duda alguna acerca de la naturaleza, el motivo o la causa ocasional, los agentes exteriores, la exaltación, en fin, que contribuyeron a producir aquel delito? Se derivó de una lucha electoral, de una lucha por ideales políticos, en el momento de ponerse fin a un escrutinio, en defensa de lo que un grupo de vecinos juzgaba su derecho; y un crimen cometido en medio de tales circunstancias no puede confundirse, dígase lo que se quiera, con un crimen vulgar ejecutado por innobles y bajas pasiones; un delito de esa clase no tendrá todas las características que la hermenéutica exija para definir un delito político, pero dentro de la política nació y todas las circunstancias políticas que concurrieron en su realización, no serán una eximente completa, pero nadie puede negar que sean una atenuante calificadísima: es decir, que si el Gobierno no ha querido incluirlo en la amnistía, no debe, en cambio, oponerse al ejercicio de la gracia de un indulto parcial para cuantos en él intervinieron.

* * *

En el proceso instruido con motivo de los luctuosos sucesos de Benagalbón concurren, además, circunstancias especialísimas que recomiendan muy eficazmente la concesión de un indulto parcial para los cuatro reos que en la actualidad sufren condena.

No hablemos de los sesenta y tantos detenidos, que durante cerca de un mes permanecieron en la Prisión provincial de Málaga, siendo puestos en libertad al cabo de tan largo tiempo, sin que resultara cargo alguno contra ellos.

Tampoco hagamos mención de algunos encartados, contra los cuales se pidió pena y que fueron luego absueltos con todos los pronunciamientos favorables; ni traigamos a colación las cuatro causas incoadas por la jurisdicción ordinaria y de las que tres se sobreyeron, y en la otra fué retirada la acusación por el ministerio fiscal.

Tratemos sólo de los reos sentenciados a distintas penas. Los hechos acaecieron en el pueblo de Benagalbón el día 8 de Marzo de 1914 y el Consejo de guerra celebróse en Málaga los días 3 y 4 de Diciembre del mismo año.

Un dignísimo oficial del Ejército, comandante de Artillería, sostuvo la acusación, dividiendo en tres grupos los cargos que resultaban contra los procesados y estimando comprendido en el primero un delito de insulto a la fuerza armada; que tuvo por consecuencia la muerte de un guardia. De este delito acusó a Enrique Roldán González, Enrique Roldán Gómez, Dolores Gómez Villalba y José Díaz Villalba, para quienes solicitaba la pena de muerte.

En el segundo grupo apreció un delito de lesiones a otros guardias civiles, considerando responsable a Francisco Pérez Segura, para quien interesaba la pena de doce años y un día de reclusión temporal.

Figuraban en el tercer grupo los demás autores de la agresión a la fuerza y demandóse para cada uno de los acusados, Antonio Anaya López, José Garrido García, Rafael Pérez Lozano, José Roldán Martín y José Garrido Salado, tres años de prisión correccional; y para Victoriano Palma Santana, Manuel Rodríguez Anaya y Antonio Díaz Fernández, seis meses y un día de igual prisión.

Ahora bien: verificado el interrogatorio de los procesados y practicada la restante prueba, el fiscal modificó sus conclusiones respecto a los procesados José Díaz Villalba y Francisco Pérez Segura, para quienes había pedido en un principio la pena de muerte y la de doce años de reclusión temporal, respectivamente, y a virtud de esa modificación, interesó que fuera absuelto el primero, solicitando para el segundo tres años y un día de prisión correccional.

Disintió el capitán general de la región, y remitida la causa al Consejo Supremo de Guerra y Marina, dictóse en definitiva sentencia, imponiendo a Enrique Roldán González, a su mujer Dolores Gómez Villalba y su hijo Enrique Roldán Gómez la última pena; a Francisco Pérez Segura nueve años de prisión mayor; a José Díaz Villalba y José Roldán Martín seis años de prisión correccional, y a Antonio

Anaya López, José Garrido García y Rafael Pérez Lozano cinco años de igual pena.

Indultados por reales órdenes del ministerio de la Guerra, al cumplir la mitad de sus condenas, Antonio Anaya López, José Garrido García, José Roldán Martín y José Díaz Villalba; fallecido Rafael Pérez Lozano, hubieran podido acogerse hoy a la amnistía, de alcanzarles la ley, los demás reos, o sea Enrique Roldán González, Dolores Gómez Villalba y Enrique Roldán Gómez, a quienes se conmutó en 20 de Mayo de 1915 la pena de muerte por la inmediata de reclusión perpétua, y Francisco Pérez Segura que no ha obtenido hasta ahora indulto alguno.

* * *

Concretando nuestra petición de indultos parciales a los sentenciados de Benagalbón, voy a permitirme llamar la atención del señor conde de Romanones, como ponente del Gobierno en todo lo relativo a la amnistía, sobre el caso singular de uno de dichos penados: Francisco Pérez Segura.

Para este procesado pidióse primero una pena de *doce años y un día de reclusión temporal*, el Consejo de guerra le sentenció luego a *tres años y un día de prisión correccional*, y, por último, el Supremo de Guerra y Marina le impuso la de *nueve años de prisión mayor*.

Lleva hasta el día en prisión cuatro años, dos meses y cuatro días y le faltan todavía algunos meses para que, cumplida la mitad de la condena, pueda solicitar y obtener reglamentariamente el indulto del resto de la pena. Digo esto, porque indultados ya los cuatro reos que cumplieron esa duración, es de esperar con todo fundamento que no se le negará la gracia que disfrutaban afortunadamente sus compañeros de proceso.

Si el Gobierno otorga indulto parcial a Francisco Pérez Segura, procediendo así habrá sólo anticipado para este reo por unos meses la concesión de libertad.

De regir el sistema acusatorio en el fuero militar como en el fuero común, Pérez Segura hubiera sido ya restituído desde hace más de un año a sus padres sexagenarios, de quienes es el único sostén. No pedida más pena que la de tres años y un día por el fiscal al verse la causa en el juicio ordinario, no se le habría impuesto otro castigo y no se habría tampoco remitido el proceso en revisión al Supremo de Justicia.

Por otra parte, esta misma variabilidad de la petición fiscal de doce a tres años y luego de la pena de tres a nueve años ¿no es una invocación a la vieja máxima jurídica *in dubio pro reo*?

Y si las anteriores consideraciones no fueran bastantes para mover el ánimo del Gobierno en el sentido de la concesión de un indulto a favor de este penado, recordaría el precedente de lo ocurrido con otros desgraciados de esta misma provincia: la colisión entre unos vecinos de Canillas de Aceituno y la fuerza armada el 9 de Abril de 1911.

Fueron, a la sazón, sentenciados por el fuero de Guerra ocho hombres a trece años, nueve meses y once días de reclusión: Francisco Palomo Pérez, Francisco y Rafael Villalobos Jiménez, Miguel Rando Peláez, Francisco Martín Ramírez, Juan Pérez Muñoz, Juan Ruiz Ramírez y Francisco Moyano Moreno.

Y no transcurrieron dos años sin que el Gobierno les concediera a todos un indulto total de sus penas.

Ahora pedimos menos, mucho menos de lo que se otorgó entonces, y tenemos más títulos para pedir, porque los gobernantes de 1913 no vinieron al poder con un programa de amplia amnistía, ni tal postulado legitimó la formación de aquel Gobierno, como legitima la del actual, ni había en el país una necesidad, tan absoluta como hoy existe, de serenar por todos los medios los diversos sectores de la opinión, habiendo alguno que no queda satisfecho con la amnistía votada y confía que el Gobierno ha de atender las vivas ansias de indultos parciales, y, entre ellos, muy señaladamente, el de los reos de Benagalbón.

* * *

Manifestó el Gobierno al discutirse el proyecto de ley de amnistía en el Senado, que no pudiendo incluir en él a los sentenciados por delitos de agresión o insulto a la fuerza armada, hallábase dispuesto a examinar las condiciones de cada penado para los casos en que procediera la concesión de indultos parciales.

Así lo ha ofrecido para los marinos del «Numancia». Así lo hemos interesado en el mitin celebrado en Málaga hace días y el señor conde de Romanones se dignó contestarnos que daría cuenta de nuestra petición en Consejo de ministros.

El caso de los reos de Benagalbón es un caso idéntico al de los reos del «Numancia». Procédase al estudio detenido de ambas causas, y si los marinos de la histórica fragata pueden y deben ser totalmente indultados, concédase también un indulto del resto de su pena a Francisco Pérez Segura y rebájese, cuando menos, a ocho años de prisión la pena de Enrique Roldán González, Dolores Gómez Villalba y Enrique Roldán Gómez, exactamente lo mismo que se hizo en 1914 con los marinos del «Numancia», cuya última pena se conmutó, como en 1915

a los reos de Benagalbón, por la de reclusión perpétua; y de ese modo el Gobierno actual habrá atemperado su conducta a la de otros anteriores, no tan obligados, ciertamente, como él, a mostrarse benignos y satisfacer a un tiempo las exigencias de la justicia y los impulsos de la piedad, conciliando todas las aspiraciones y necesidades espirituales del momento que atravesamos.

II

El texto de la ley de amnistía sancionada el 8 de Mayo actual dice lo siguiente:

«Artículo 1.º Se concede amnistía a todos los sentenciados, procesados o sujetos de algún modo a responsabilidad criminal, sean cuales fueren el Tribunal o la jurisdicción que hubieran tramitado los procesos o impuesto las condenas, por razón de los delitos y faltas siguientes...

Tercero. *Los de rebelión y sedición y sus conexos* cuando los condenados o procesados no sean militares. *Exceptúanse los delitos comunes y los de agresión a la fuerza armada.*

Cuarto. Los cometidos con ocasión de huelgas de obreros, así como las transgresiones previstas y penadas en la ley de Coligaciones y huelgas. Se exceptúan los delitos comunes y los de agresión a la fuerza armada.»

Es de advertir que en el proyecto presentado a la alta Cámara por el señor Maura el caso tercero estaba redactado en estos términos:

«Tercero. *Los de rebelión y sedición* cuando los condenados o procesados no sean militares. *Exceptúanse los casos de agresión a la fuerza armada.*»

Requirióse a la Comisión dictaminadora del proyecto por los senadores señores Maestre, Mataix y otros en las sesiones de los días 22 y 23 de Abril último para que la redacción del referido caso tercero se modificara en el sentido de mayor amplitud, sin que la Comisión accediera a ello.

La nueva redacción de la ley o sea la adición de las palabras «y sus conexos» y «exceptúanse los delitos comunes» débese a la Comisión nombrada por el Congreso para emitir dictamen acerca del proyecto votado por el otro Cuerpo Colegislador, nueva redacción que se mantuvo a su vez por la expresada Comisión, sin aceptar ninguna de las enmiendas que en la Cámara popular se presentaron.

Ahora bien, ¿qué alcance, qué significación tiene en definitiva el texto del proyecto de la Comisión dictaminadora del Congreso, convertido hoy en texto legal?

El señor Goicoechea, uno de los individuos de la Comisión, se encargó de precisarlo en la sesión celebrada por el Congreso el día 4 de Mayo actual, diciendo:

«Se amnistían los delitos de rebelión y sedición y sus conexos; con lo cual queremos decir que *los choques con fuerza armada, cuando sean cualificativos, constitutivos, característicos de los delitos de rebelión y sedición, están amnistiados; que lo están asimismo los delitos conexos*, entendiendo por tales los que define el artículo 17 del Código de Justicia militar, es decir los que han servido de medio para la ejecución de otro delito, o los que se han realizado colectivamente por las personas responsables. *¿Qué es la excepción? Pues exclusivamente el delito específico, aislado de insulto y agresión a fuerza armada*, caracterizado y definido en los artículos 253 y 254 del Código de Justicia militar.»

«Cuando en la carpeta del proceso aparezca escrito «rebelión, sedición y sus conexos», el delito habrá quedado amnistiado por virtud de la promulgación de esta ley; pero cuando, en la carpeta del proceso lo que aparezca sea «insulto a fuerza armada», castigado en los artículos 253 y 255 del Código de Justicia militar, el hecho no puede ser objeto de amnistía, porque es un delito no político, específicamente distinto, castigado aparte en los preceptos del Código de Justicia militar.»

Resulta, pues, de las manifestaciones hechas por el señor Goicoechea a nombre de la Comisión y por ésta a nombre del Gobierno—tal es la práctica constante parlamentaria y los ministros, entre ellos el de Gracia y Justicia, presentes en el banco azul, no pusieron reparo alguno a esa interpretación doctrinal sustentada—que la limitación establecida por la ley para los casos de agresión a la fuerza armada no es tan radical y absoluta como pudiera deducirse de la simple lectura del texto de la ley: está condicionada, hay excepciones de la excepción.

Veamos cómo. El texto de la ley, diferente del proyecto en la letra y en el espíritu, representa una transacción entre el criterio de la Comisión del Senado y sus impugnadores. Ello es innegable. Y la explicación dada por el señor Goicoechea en el Congreso lo corrobora.

Reconoció la Comisión dictaminadora de la Cámara popular que existían casos en que el delito de agresión o insulto a la fuerza armada se halla rodeado de tales circunstancias que el rigor de la ley, *summum jus*, hubiera dado lugar a grandes faltas de equidad, *summa*

injustitia, y quiso con excelente acuerdo templar, suavizar, moderar ese rigor. De aquí que se agregaran a las palabras *delitos de rebelión y sedición*, estas otras *y sus conexos*, y para aclarar aun más el concepto, las de *exceptuarse los delitos comunes*, adición con la que se ha pretendido indudablemente determinar que por *delitos conexos* debían entenderse los llamados sociales y políticos, no cualquiera otra clase de delitos. De este modo el precepto legal obedecía a una orientación y a una unidad, y el caso tercero del artículo primero de la ley cumplía así el objeto de ésta que era amnistiar a los sentenciados y procesados por delitos sociales y políticos, no a todo linaje de presos y penados.

* * *

Esforzándose las minorías de las izquierdas en el Congreso por conseguir que se aceptara la siguiente enmienda al caso tercero del artículo primero de la ley:

«Tercero. Los de rebelión y sedición, así militar como civil, y sus conexos.»

Pero fué en vano. La modificación no se admitió, y la ley quedó redactada en los términos anteriormente consignados. Es decir que sólo se amnistia la rebelión y sedición civil, no la militar.

Cumple a nuestro propósito dejar sentada la distinción que existe entre la rebelión y la sedición definidas y castigadas en el Código Penal común y la rebelión y sedición penadas en el Código de Justicia militar vigente.

He aquí la forma en que ambos cuerpos legales describen los aludidos delitos:

CÓDIGO PENAL

Art. 243. Son reos de rebelión los que se alzaren públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno para cualquiera de los objetos siguientes:

1.º Destronar al rey, deponer al regente o regencia del reino, o privarles de su libertad personal u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.

2.º Impedir la celebración de las elecciones de diputados a Cortes o senadores en todo el reino, o la reunión legítima de las mismas.

3.º Disolver las Cortes o impedir

CÓDIGO MILITAR

Art. 237. Son reos del delito de rebelión militar los que se alcen en armas contra la Constitución del Estado contra el rey, los Cuerpos Colegisladores o el Gobierno legítimo, siempre que lo verifiquen concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Que estén mandados por militares, o que el movimiento se inicie, sostenga o auxilie por fuerzas del Ejército.

2.ª Que formen partida militarmente organizada y compuesta de diez o más individuos.

la deliberación de alguno de los Cuerpos Colegisladores o arrancarles alguna resolución.

4.º Ejecutar cualquiera de los delitos previstos en el artículo 165.

5.º Sustraer el reino o parte de él o algún cuerpo de tropa de tierra o de mar, o cualquiera otra clase de fuerza armada, de la obediencia al supremo Gobierno.

6.º Usar y ejercer por sí o despojar a los ministros de la Corona de sus facultades constitucionales, o impedirles o coartarles su libre ejercicio.

CÓDIGO PENAL

Art. 250. Son reos de sedición los que se alzan pública y tumultuariamente para conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales, cualquiera de los objetos siguientes:

1.º Impedir la promulgación o la ejecución de las leyes o la libre celebración de las elecciones populares en alguna provincia, circunscripción o distrito electoral.

2.º *Impedir a cualquiera autoridad, corporación oficial o funcionario público el libre ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus providencias administrativas o judiciales.*

3.º Ejercer algún acto de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes.

4.º Ejercer, con un objeto político o social, algún acto de odio o de venganza contra los particulares o cualquiera clase del Estado.

5.º Despojar, con un objeto político o social, de todos o parte de sus bienes propios a alguna clase de ciudadanos, al municipio, a la provincia o al Estado, o talar o destruir dichos bienes.

3.ª Que formen partida en menor número de diez, si en distinto territorio de la Nación existen otras partidas o fuerzas que se proponen el mismo fin.

4.ª Que hostilicen a las fuerzas del Ejército antes o después de haberse declarado el estado de guerra.

CODIGO MILITAR

Art. 243. Los militares que, en número de cuatro o más, rehusen obedecer a sus superiores, hagan reclamaciones o peticiones en tumulto, o se resistan a cumplir sus deberes, serán castigados:

Cuando el delito tenga lugar al frente del enemigo, o de rebeldes o sediciosos, en actos del servicio, dentro del cuartel, acudiendo a las armas o ejerciendo violencias contra los superiores, con la pena de muerte el que lleve la voz o se ponga al frente de la sedición, los promovedores y el de mayor empleo o el más antiguo, si hubiese varios del mismo, de los que tomen parte en el delito.

Con la de reclusión militar temporal a reclusión militar perpetua, los meros ejecutores.

Con la de prisión militar correccional a prisión militar mayor en los demás casos.

De los artículos 253 al 255 del Código de Justicia militar invocados por el señor Goicoechea, el que se aplicó a los reos de Benagalbón

Enrique Roldán González, Dolores Gómez Villalba y Enrique Roldán Gómez es el que a continuación reproducimos:

«Art. 253. Incurrirá en la pena de muerte: 1.º El que en campaña maltrate de obra a centinela o salvaguardia. 2.º El que cometa el mismo delito, no siendo en campaña, contra centinela, salvaguardia o fuerza armada, si causare muerte o lesiones que dejen al ofendido imbécil, impotente o ciego, privado de miembro principal, impedido de él o inutilizado para el trabajo a que hasta entonces se hubiere dedicado habitualmente.»

No contiene el Código de Justicia militar ninguna otra definición del delito de insulto a la fuerza armada castigado con pena de muerte.

También interesa recordar que el Título primero del Tratado segundo del Código de Justicia militar comienza con un precepto que dice:

«Art. 171. Son delitos o faltas militares las acciones y omisiones penadas en esta ley.»

Respecto a los delitos denominados comunes, el Código Penal de la Marina de Guerra los define en el siguiente:

«Art. 3.º El delito o falta es militar cuando la acción u omisión afecta directamente a la disciplina, o viola algún deber exclusivamente militar; profesional, cuando se falta a algún deber de los que están obligados a cumplir, en sus respectivas profesiones, los individuos de de los diferentes Cuerpos e institutos de la Armada; y común, cuando la acción u omisión no está comprendida en los casos anteriores.»

Los delitos comprendidos en los artículos 243 y 250 del Código Penal común son los que se amnistían.

No los delitos que definen los artículos 237 y 243 del Código de Justicia militar. Ni el que pena el artículo 253 de dicho cuerpo legal, ni los comunes, cuando todos ellos son específicos y aparecen aislados.

Pero conexos o simultáneos a los delitos de rebelión y sedición civil, por lo menos en ciertas condiciones, sí.

Es la doctrina sostenida por la Comisión dictaminadora del Congreso.

Y huelga decir lo que se entiende por delitos conexos en nuestra legislación.

Lo aclara y determina no sólo el artículo 17 del Código de Justicia militar, sino la siguiente disposición de la ley sobre organización del Poder judicial:

«Art. 331. Considéranse delitos conexos: 1.º Los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas. 2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos, si hubiere precedido concierto para ello. 3.º Los cometidos como medio para perpetrar

otros o facilitar su ejecución. 4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.»

* * *

Importa ahora para la concesión de estos indultos parciales, por los que, como el de los reos de Benagalbón, venimos abogando, fijar bien los hechos, y no sólo los hechos sino el desarrollo, la generación de los hechos que dieron lugar a la instrucción de las causas o procesos respectivos.

¿Cuáles fueron los sucesos ocurridos en Benagalbón? No conocemos los procesos por ellos formados ni la tramitación dada a los mismos, pero sí los partes oficiales que en aquellos días insertó la prensa y las reseñas de las sesiones públicas que celebraron el Consejo de Guerra en Málaga y el Supremo de Guerra y Marina en Madrid.

En el parte oficial que el Gobernador civil de Málaga facilitó a la prensa el 9 de Marzo de 1914 o sea el siguiente de ocurrir los sucesos, se decía que *el presidente de la mesa electoral reclamó por escrito el auxilio del cabo de la guardia civil*, expresándole sus temores de que se alterara el orden público *ante la excitación que se notaba en la gente aglomerada a la puerta del colegio*; que la presencia de la fuerza calmó los ánimos, y sobre las seis de la tarde, después de terminado el escrutinio, *un grupo formado por más de trescientas personas promovió fuerte alboroto*; y que la guardia civil requirió en buenas formas a los vecinos *para que depusieran su actitud hostil*, pero no hicieron caso y a la voz de ¡a ellos! acometieron a los guardias con piedras y palos desarmándolos.

Tal es la versión de los sucesos facilitada a la prensa en los centros oficiales de Málaga el 9 de Marzo de 1914. Ni la comentamos, ni suprimimos nada por nuestra parte.

* * *

Las causas instruidas por el Juzgado del distrito de la Alameda de Málaga con motivo de los sucesos de Benagalbón fueron las que vamos a enumerar:

Causa número 62, por coacciones electorales: sin procesado. Se dictó auto de sobreesimiento provisional el 20 de Julio de 1914.

Causa número 63, por disparo de arma de fuego: procesado, Antonio Triano. Celebróse el juicio oral y fué absuelto el procesado.

Causa número 64, por disparo: procesados, Francisco Delgado y

Antonio Molina. Se dictó auto de sobreseimiento provisional el 27 de Julio de 1914.

Causa número 65, por desórdenes públicos: sin procesado. Se dictó auto de sobreseimiento provisional el 20 de Julio 1914.

Causa número 110, por lesiones: sin procesado, habiéndose promovido en ella cuestión de competencia por la jurisdicción de guerra.

Expuestos así todos los precedentes legales y una sucinta relación oficial de los hechos, ponemos término hoy a este trabajo, que continuaremos otro día para tratar de esclarecer este punto de la mayor importancia en relación con la ley de amnistía recién promulgada: ¿Además del delito de insulto o agresión a la fuerza armada, se cometió en Benagalbón algún otro delito que pudo ser el de sedición? ¿En ese caso, el primero fué o no delito conexo del segundo?

III

¿Además del delito de insulto o agresión a la fuerza armada, cometióse algún otro delito que pudo ser el de sedición? ¿En ese caso, el primero fué o no delito conexo del segundo? Tal es el punto cuyo esclarecimiento, según manifestábamos hace días, creemos de la mayor importancia para la concesión de un indulto parcial a favor de los reos de Benagalbón por consecuencia de la última amnistía.

No puede perderse de vista un momento el origen de aquellos luctuosos sucesos. No se cometió un delito de agresión a la fuerza armada *aislado*, circunstancia que el individuo de la Comisión dictaminadora del Congreso, señor Goicoechea, estimaba como una de las condiciones que determinan la excepción de la ley para esa clase de delitos.

El parte oficial dirigido al Gobernador civil de Málaga, cuyo texto debe constar en el proceso, contiene elementos suficientes para formar juicio acerca de la forma en que se iniciaron los hechos. Celebrábanse aquel día elecciones de diputados a Cortes en toda la península, y la del colegio de Benagalbón deslizóse sin incidente alguno hasta la hora del escrutinio. En el parte oficial se habla de temores de alteración, *no del orden dentro del colegio, sino del orden público*; de la excitación de la gente aglomerada a la puerta del local, donde se verificaba el acto de la elección; de grupo formado por más de trescientas personas que promovía fuerte alboroto; de la actitud *hostil* de los vecinos y de que éstos no hacían caso de las exhortaciones de la guardia civil, surgiendo de aquí el choque entre ellos y la fuerza armada.

No cabe tampoco olvidar el carácter o concepto que la ley atribuye a los individuos que forman una mesa electoral, así al presidente y adjuntos, como a los interventores designados por los candidatos, concepto o carácter definido en el artículo de la ley electoral de 8 de Agosto de 1908, que dice:

«Art. 77. Para los efectos de esta ley se reputarán funcionarios públicos los de nombramiento del Gobierno y los que por razón de su cargo desempeñen alguna función relacionada con las elecciones, así como los presidentes y vocales de las Juntas del Censo electoral, y los presidentes, adjuntos e interventores de las Mesas electorales.»

Todo ello demuestra que, además de las circunstancias que concurrieran para la comisión de un delito de insulto a la fuerza armada, se dieron otras características de hechos que pudieron constituir el de sedición, comprendido con el número 2.º del artículo 250 del Código Penal común.

Existió, a juzgar por el parte oficial, alteración del orden público, que no se redujo, sin duda, a una falta de las castigadas en los artículos 585 a 589 del Código Penal, ni hubo de contenerse, según esa misma versión oficial, dentro de los límites del delito de desórdenes públicos, descripto en el artículo 271 del Código Penal.

He aquí, en efecto, el texto de esta disposición legal:

«Art. 271. Los que causaren tumultos o turbaren gravemente el orden en la audiencia de un Tribunal o Juzgado, en los actos públicos propios de cualquiera autoridad o corporación, *en algún colegio electoral*, oficina o establecimiento público, en espectáculos o solemnidad o reunión numerosa, serán castigados con la pena de arresto mayor en su grado medio a prisión correccional en su grado mínimo y multa de 150 a 1.500 pesetas.»

Véase cómo el señor Groizard comenta tal artículo: «Todos saben lo que es causar tumulto: equivale a motín, alboroto, confusión popular o de otra clase. También se comprende fácilmente lo que significa turbar gravemente el orden. Pues bien: cuando esto se realiza *en algunos de los sitios expresados*, queda consumado el hecho incriminado en el texto.»

El delito de desórdenes públicos no supone, en una palabra, *alzamiento*; el de sedición, sí.

Por eso, el Código español de 1822 lo describía en estos términos:

Art. 280. Es *sedición el levantamiento ilegal y tumultuario de la mayor parte de un pueblo o distrito*, o el de un cuerpo de tropas o porción de gentes, que *por lo menos pasen de cuarenta individuos*, con el objeto, no de sustrarse de la obediencia del Gobierno supremo de la nación, sino de *oponerse con armas o sin ellas* a la ejecución de

alguna ley, acto de justicia, *servicio legítimo* o providencia de las autoridades, o de atacar o resistir violentamente a éstas o a sus ministros, o de excitar a la guerra civil, o de hacer daño a personas o a propiedades públicas o particulares, o *de trastornar o turbar de cualquier otro modo y a la fuerza el orden público.*»

Y al comentar el ya citado señor Groizard la redacción del artículo 250 en el vigente Código Penal, añadía: «En la reforma se ha querido sin duda determinar más el *carácter colectivo de esta clase de delitos—Un reducido número de personas no se alzan públicamente contra las autoridades* o si se alzan no producen daño, el peligro, la alarma inherentes a una verdadera sedición. Para subvertir el orden público, atropellar las leyes o *impedir a las autoridades el ejercicio de sus funciones*, es por lo menos necesario la ostentación de una *fuerza colectiva* que pueda creerse en condiciones, si no de triunfar, de resistir el empuje de la fuerza pública. Una reunión tumultuaria es casi siempre signo de la eficacia del medio elegido para llegar al fin del delito.»

El Código de 1822 exigía la reunión de *cuarenta individuos* para que hubiera alzamiento: en Benagalbón dicen las autoridades que se formó un grupo de más de *trescientas personas* que alborotaban.

Puede objetarse que la jurisdicción ordinaria no procedió a instruir proceso de sedición por los sucesos de que se trata. Es cierto. Ninguna de las causas incoadas por el Juzgado de instrucción del distrito de la Alameda de Málaga lo fué por el referido delito. La causa número 62 se formó por hechos de coacciones que se suponía ocurridos en la Cala del Moral distante de Benagalbón más de ocho kilómetros; la causa número 63 por disparo de arma en sitio de Benagalbón no próximo ni inmediato al colegio electoral, en cuya puerta se desarrollaron los sucesos; la causa número 64 por otro supuesto delito de disparo en el camino del Rincón de la Victoria a la Cala del Moral; la causa número 65 por desórdenes públicos ocurridos en el Rincón de la Victoria, y la número 110 por lesiones inferidas en Málaga. Todas ellas terminaron, como hemos dicho, por sobreseimiento o absolución.

¿A qué motivo obedeció que el Juzgado de instrucción del distrito de la Alameda no actuara, pues, para perseguir el delito de sedición?

Los lectores van ahora a explicarse perfectamente la razón de no haberse incoado esa causa, aun existiendo como debió existir el delito del artículo 250 del Código Penal común, si nos atenemos a la versión del parte oficial recibido en el Gobierno civil de Málaga.

* * *

En los conflictos entre las jurisdicciones civil y militar no ha dirimido la discordia el Tribunal Supremo siempre con igual criterio; pero

frecuentemente ha resuelto aquéllos en forma que el fuero de Guerra, tratándose de delitos conexos, atrafa a sí el conocimiento de hechos propios de los tribunales ordinarios.

Un caso idéntico al de Benagalbón hemos de exponer como ejemplo decisivo y concluyente.

Los hechos ocurrieron en Orense el día 10 de Septiembre de 1892 con motivo de haber exigido los dependientes del arrendatario del impuesto sobre puestos públicos a las vendedoras de hortalizas, en la plaza de Abastos, cinco céntimos más que de costumbre, por notar dicho arrendatario que en las tarifas vigentes se estipuló la cuota de diez céntimos por cada puesto que excediera de 11 kilogramos, y no la de cinco céntimos que se cobraba.

Las vendedoras se opusieron a pagar el aumento y los dependientes insistieron en exigirlo, *amotinándose aquéllas y dirigiéndose en tropel* a algunas casetas de consumos, que fueron incendiadas, llevando una de las mujeres una bandera roja, con un cartel que decía: «¡Abajo los consumos!» y *como la turba, principalmente formada por mujeres y chiquillos*, se encaminara hacia el fielato central, donde se guardaban los fondos de la recaudación, el Comandante subinspector de la guardia civil, con 14 guardias, se propuso su custodia, y al avanzar la gente, *sin hacer caso de las amonestaciones* que se le dirigían, el jefe de la fuerza, en vista de que *se apedreaba a los guardias*, previas las intimaciones de la ley, según el mismo aseguraba, *mandó hacer fuego al aire*.

Comenzaron a instruir sumarios el juez de instrucción de Orense y otro militar, y requirió el primero de inhibición al Capitán general de Galicia, fundado en que se trataba de un delito de sedición, previsto en el número segundo del artículo 250 del Código Penal y correspondiendo su conocimiento a los tribunales ordinarios, según los 269 y 321 de la ley orgánica del Poder judicial.

Alegaba el juez de instrucción que la sedición y la rebelión son constitutivos de un delito genérico, consistente en alzamiento público y tumultuario para conseguir fuera de las vías legales los fines mencionados en el citado artículo 250, haya o no combate entre los sediciosos y la fuerza pública, y causen los primeros o no estragos y violencias; que la provocación o ataque a la guardia civil por los paisanos alzados tumultuariamente para impedir la cobranza de un arbitrio legítimamente impuesto por la autoridad competente, no podía estimarse como delito distinto del de sedición, ni ser perseguido y castigado separadamente de éste; que según el número 5.º del artículo 349 de la ley Orgánica, los reos de delitos contra la seguridad interior del Estado y contra el orden público, cuando la rebelión o sedición no

tenga carácter militar, deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, y era evidente que en el caso de que se trataba la sedición no tuvo tal carácter excepcional; que el conocimiento del referido delito correspondía a la jurisdicción ordinaria, tanto que el artículo 4.º de la ley estableciendo el juicio por Jurados, lo sometía a la competencia del mismo tribunal; y que la resistencia o agresión de los sublevados a la fuerza pública en delitos de aquella naturaleza, constituía una circunstancia o accidente de él y no un delito separado e independiente, según la doctrina establecida en el auto del Tribunal Supremo de 23 de Mayo de 1890, que decidió que corresponde a la justicia ordinaria el conocimiento de los delitos de sedición, cuando no tienen carácter militar.

El Capitán general de Galicia no accedió a la inhibición, fundado en que los hechos referidos no tenían el carácter de sediciosos, porque el alzamiento público y tumultuario no se propuso alguno de los objetos que señala el citado artículo 250 del Código Penal, y faltando esa condición, quedaba sólo el delito de desorden público o el de incendio, además del de insulto a fuerza armada; que los amotinados se limitaron a destruir por el incendio los fieltos de consumos, como protesta, según algunos testigos contra el aumento del arbitrio sobre puestos públicos exigido por el arrendatario, y que todo ello por sí solo no era constitutivo del delito de sedición, siquiera fuese acompañado de ataques a la fuerza armada; por lo que la jurisdicción militar debía conocer de las agresiones hechas contra la guardia civil, y la ordinaria de los delitos de incendio y de desorden, con sujeción al número 4.º del artículo 7.º del Código de Justicia militar y 350 de la ley Orgánica del Poder judicial, que reservaban siempre al fuero de Guerra el conocimiento del delito.

El Capitán general de Galicia alegaba, además de lo expuesto, que aun cuando concediendo que los hechos reseñados constituyeran el delito de sedición, no podía desprenderse el fuero militar del conocimiento de la causa en los dos extremos a que se dirigía, o sea el de precisar si hubo o no culpabilidad en la guardia civil que intervino en ellos, y el de averiguar los autores de la agresión a la misma fuerza, siendo la jurisdicción de Guerra la única competente en el primer concepto, por razón de las personas, con arreglo a los artículos 347 de la ley Orgánica ya citada, y 5.º, número 1.º, del Código de Justicia militar; y también en el segundo, por la naturaleza del delito, según los artículos 350, número 4.º, y 7.º, igual número, de dichos cuerpos legales.

No hemos de ocultar que el Capitán general invocaba, por último, que no obstante la doctrina del auto del Tribunal Supremo de 23 de

Mayo de 1890, como análoga a la del de 24 de Marzo de 1887, resolviendo que el ataque a fuerza armada era uno de los caracteres de los delitos de sedición o de rebelión, que no cabía penar separadamente, se había publicado con posterioridad el Código de Justicia militar, cuyos preceptos reguladores de los conflictos jurisdiccionales extendían más los límites de la jurisdicción especial de Guerra, y que pudieran ser de aplicación al caso los números 2.º y 4.º, párrafo último del artículo 16 de dicho Código, ya porque se entendiera que el delito de ataque a fuerza armada, de naturaleza militar, según los artículos 171 y 253 al 258, era independiente del de sedición y podía ser castigado separadamente, ya porque se apreciara que ambos delitos fueran producto de un solo hecho, y que el primero tenía señalada en el artículo 254 del Código de Justicia militar pena superior a la marcada al segundo en el 251 del Penal ordinario, debiendo, por tanto, ser juzgados por la jurisdicción de Guerra.

Insistió el Juzgado de instrucción de Orense en su criterio, y por consecuencia elevó al Tribunal Supremo testimonio de las actuaciones, y el Capitán general remitió las suyas originales, siendo el ministerio fiscal de dictamen que se declarara competente a la jurisdicción ordinaria.

Pues bien: el Tribunal Supremo decidió en 20 de Diciembre de 1892 la competencia a favor de la jurisdicción de Guerra, estimando que, según el último párrafo del artículo 16 del Código de Justicia militar, cuando un hecho es constitutivo de dos o más delitos, de que deban conocer jurisdicciones distintas, es competente para juzgarlo la que en su caso habría de imponer la pena más grave, y que como *los hechos que motivaron la causa constitulan el delito de sedición no militar, penado en el artículo 251 del Código Penal común, y el de insulto o maltrato a fuerza armada, comprendido en el artículo 254 del de Justicia militar*, siendo más grave la pena que por éste se impone al segundo delito que la señalada al primero por el Código ordinario, a la jurisdicción de Guerra competía juzgarlo.

* * *

Nos hemos extendido detenidamente en la reseña de este caso de Orense que guarda perfecta y absoluta analogía, a nuestro juicio, con el de Benagalbón, porque arroja completa luz sobre la razón o el motivo de abstenerse con frecuencia la jurisdicción ordinaria de todo procedimiento.

Cuando se comete un delito de sedición y otro de insulto a la fuerza armada, el uno civil y el otro militar, la jurisdicción de Guerra

es la que debe conocer de los dos, a virtud de la doctrina establecida en el auto que dictó el Tribunal Supremo en 20 de Diciembre de 1892.

El hecho de no haber procedido el Juzgado de instrucción de la Alameda a formar causa por los sucesos de Benagalbón, no prueba que el delito de sedición civil no existiera ni que, de existir, no fuera conexo del de agresión a la fuerza armada.

Lo que puede suceder es que, siendo por lo general más graves los delitos de agresión, la tramitación de éstos merezca preferente interés en los encargados de instruir los procesos, y con la imposición de penas correspondientes a los de agresión, se consideren cumplidos los fines de la justicia.

En apoyo de nuestra tesis, el señor Goicoechea, cuyas manifestaciones hemos invocado anteriormente, aclara aún más los conceptos por él expresados, diciendo lo que sigue:

«En cuanto a las agresiones a la fuerza armada, después de haber extremado nosotros la claridad, tanto en los artículos del dictamen como en las explicaciones que he tenido el honor de dar a la Cámara en nombre de la Comisión, creo que es innecesaria la nueva aclaración que solicita S. S.; pero le voy a decir para su tranquilidad una cosa. Tanto entendieron las jurisdicciones de Guerra que en la frase «casos de agresión a la fuerza armada» se encuentran comprendidos sólo los delitos específicamente castigados por los artículos 253, 254 y 255 del Código de Justicia militar que *hasta ahora todos los procesos pendientes, con independencia de los de rebelión y sedición, lo son exclusivamente por esta causa*; de suerte que no puede haber confusión ninguna entre los hechos constitutivos de rebelión y sedición que se amnistían, y los que están previstos y castigados en los artículos citados.»

El orador se refería a las causas por los sucesos de 13 de Agosto de 1917, hechos que motivaron la formación de gran número de procesos y que en algunos casos podrán ser específicos, pero no siempre, ya que muchas veces el delito de rebelión o sedición lleva consigo violencias que determinan otros delitos inseparables de aquél y que se califican luego de insulto o agresión a la fuerza armada.

IV

No tenía el Código Penal común de 1850 la misma redacción que el vigente de 1870 al describir los objetos que pudieran proponerse los reos de un delito de sedición, pues el número 2.º del artículo corres-

pondiente decía entonces: «Impedir a cualquiera autoridad el libre ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus providencias administrativas o judiciales», mientras que ahora dice: «Impedir a cualquiera autoridad, corporación oficial o funcionario público el libre ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus providencias administrativas o judiciales.»

El Código de 1870 puso así, dice el señor Viada y Vilaseca al comentar la reforma de dicho cuerpo legal, bajo la salvaguardia del número 2.º de su artículo 250 a los *funcionarios públicos* y a las corporaciones oficiales, aditamento, añade, que no podía menos de aprobarse.

Desempeñaban, por consecuencia, el día 8 de Marzo de 1914, el presidente, los adjuntos y los interventores de la Mesa electoral del colegio de Benagalbón *una función pública*, según el artículo 77 de la ley de 8 de Agosto de 1907, y en el ejercicio de esa función fueron inquietados, interrumpiéndose a virtud de ello las operaciones del escrutinio, hasta el punto de que en el parte oficial a que varias veces nos hemos referido, se afirma que eran las seis de la tarde cuando el grupo formado por más de trescientas personas promovió fuerte alboroto, y la votación debió terminar a las cuatro o sea dos horas antes.

¿Quiénes fueron los causantes de esa interrupción de los actos electorales? ¿Quiénes dieron lugar a ella? ¿Los electores y vecinos que protestaban? ¿Los electores contrarios? ¿El alcalde y sus secuaces?

Claro es que esto no lo dice ni puede decirlo la comunicación de la propia autoridad interesada, ni vamos a invocar testimonios de personas o publicaciones afectas a los electores que contendieron en aquel colegio; pero, sí, existen fuentes de conocimiento que no cabe recusar como parciales.

Una revista de Disciplina penal «Progreso Penitenciario», publicábase a la sazón en Madrid, y en su número 52 correspondiente al 22 de Marzo de 1914, esto es, cuando aún no habían transcurrido quince días desde los sucesos, manifestaba que «según correspondencia detallada de la Prisión provincial de Málaga, había ingresado en la misma sesenta y un hombres y dos mujeres por los hechos de Benagalbón y que en dicho pueblo se habían amotinado, según referencias, porque el alcalde se negaba a firmar el acta...»

Fuera el alcalde, fueran unos electores, fueran otros, resulta de toda evidencia que hubo propósito de *impedir* a determinados individuos de la Mesa electoral *el ejercicio de sus funciones*, las cuales no cesaban en tanto no se firmara el acta por el presidente, los dos adjuntos y todos los interventores de aquélla.

Lo que ocurrió allí dentro del colegio electoral, exteriorizándose

a poco fuera del local de éste, la actitud de unos y de otros, el resultado de la votación bastante para deducir de parte de quién debieron suscitarse las primeras dificultades, todo ello constará seguramente en las diligencias sumariales, y un minucioso estudio de las mismas serviría para poner de manifiesto el origen de una cuestión que no hubiera tenido tan graves consecuencias si las autoridades locales encargadas del mantenimiento del orden hubiesen procedido con la mesura y prudencia debidas.

No es este el momento ni el lugar de entrar en la exposición y análisis de los hechos, ni menos de formular recriminaciones.

Unicamente hemos de solicitar que se examine sin ninguna clase de prevención el proceso, y así se verá si en el orden de los hechos hubo o no delito de insulto o agresión a la fuerza armada aislado, si se pretendió o no impedir a los individuos de la Mesa electoral que firmaran el acta y los certificados electorales en el desempeño de sus funciones, quién pudo tener interés en alterar la verdad o el resultado de la votación, y cómo intervino la funesta plaga caciquil envenenando las pasiones para que, cuando llega la hora de anunciar y conceder una amnistía a presos y condenados por delitos sociales y políticos, nos sobre la razón en pedir un día y otro día que no se excluya de la gracia a los reos de este proceso en que tanto influyó la política.

* * *

Es cierto que el artículo 16 de la ley de Enjuiciamiento criminal declara que «la jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados.» Pero tal precepto va seguido de otro, en el mismo artículo, previniendo que ello «se entiende sin perjuicio de las excepciones expresamente consignadas en dicho Código o en leyes especiales y singularmente en las leyes penales de Guerra y Marina respecto a determinados delitos.»

Igual dispone la ley Orgánica del poder judicial en su artículo 329, si bien este Código contiene otro artículo que aclara todavía más el concepto y dice así:

«Art. 330. Lo establecido en el artículo anterior se entiende en el caso de que sea competente la jurisdicción ordinaria para juzgar de los delitos conexos.

Si algunos de éstos fuere, por su índole y naturaleza, de la competencia exclusiva de otra jurisdicción, ésta deberá conocer de la causa que se forme sobre él, sin perjuicio de que la ordinaria conozca de la que se instruya sobre las demás.»

Ya quedó explicado el motivo de no haber intervenido la jurisdicción ordinaria en el caso que nos ocupa. Además, el artículo 17 del Código de Justicia militar preceptúa que «la jurisdicción que conozca del delito principal conocerá también de los conexos» y esto es una demostración palmaria, si otras no existieran, de que el delito civil de sedición y el militar de agresión o insulto a la fuerza armada eran conexos en la causa por los sucesos de Benagalbón.

Verdad es que no se impuso más que una pena, la correspondiente al delito de agresión, pero ello no contradice, sino al contrario, confirma nuestros puntos de vista.

Primero: porque los delitos conexos no se tramitan separadamente, sino en un solo sumario. Lo determina así la ley de Enjuiciamiento criminal, de rigurosa aplicación al caso: «Cada delito de que conozca la autoridad judicial—previene el artículo 300 de dicha ley—será objeto de un sumario. Los delitos conexos se comprenderán, sin embargo, en un solo proceso.»

Segundo: porque, aun existiendo dos o más delitos, hay casos en que sólo se castigan con una pena, como se halla establecido, ya por el Código Penal común en su artículo 90, ya por el Código de Justicia militar en el siguiente:

«Artículo 213. Cuando *un solo hecho constituya dos o más delitos*, o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro, se impondrá la pena asignada al delito más grave en toda su extensión.»

Ni el hecho de no haberse instruido más que un proceso, ni el de no haberse impuesto más que una pena, prueban que no sean conexos los delitos; al contrario, estas mismas circunstancias constituyen un argumento más a favor de la tesis planteada en estos artículos.

* * *

Algo hemos indicado ya acerca de los sucesos análogos que ocurrieron en Canillas de Aceituno, pueblo de esta provincia, el 9 de Abril de 1911 y que se estimaron constitutivos de un delito de sedición civil y otro de insulto o agresión a la fuerza armada.

El primer Consejo de guerra celebrado impuso penas que oscilaban entre cadena perpétua y cadena temporal, pero el Consejo Supremo de Guerra y Marina acordó la revisión de la causa, y celebrado un segundo Consejo de guerra el 31 de Enero de 1913, el fiscal pidió para Francisco Palomo Pérez la pena de ocho años y un día de prisión mayor, para Francisco y Rafael Villalobos Jiménez, Juan Pérez Muñoz y Francisco Moyano Moreno la pena de seis años de prisión correccional, y para Miguel Rando Peláez, Francisco Martín Ramírez y Juan Ruiz Ramírez la de seis meses y un día de prisión correccional.

Remitida nuevamente la causa al Consejo Supremo de Guerra y Marina, verificóse la nueva vista el 12 de Junio de 1913, y fueron condenados en definitiva a doce años y un día de presidio Francisco Palomo, Francisco y Rafael Villalobos Jiménez, a seis años Juan Ruiz Ramírez y a cuatro años Francisco Moyano Moreno, Miguel Rando Peláez, Juan Pérez Muñoz y Francisco Martín Ramos.

Pues bien: en el proceso de la jurisdicción ordinaria por el delito de sedición para cinco de cuyos autores el ministerio fiscal había pedido ocho años de prisión mayor, se desistió de la acción penal, considerándose todos los responsables comprendidos en el número 3.º del artículo 1.º del real decreto de 23 de Enero de 1913.

Y en Agosto de 1913 obtuvieron indulto total del resto de la pena a que fueron condenados los ocho individuos de que se trata.

Permanecieron, por tanto, en prisión dos años, cuatro meses y algunos días, no llegando a exigirse, como es costumbre en la jurisdicción militar, que hubieran cumplido la mitad de sus condenas para poder solicitar el indulto.

Este se decretó y concedió como medida de buen gobierno y no sólo por el ministro de la Guerra, sino por acuerdo del Consejo de ministros.

Insistimos en recordar el precedente, ya que para la concesión de aquel indulto parcial se tuvo en cuenta el carácter del proceso de Canillas de Aceituno, político como el de Benagalbón por su origen, por su desarrollo, por sus actores, por todo. Los reos de Canillas tuvieron, sin embargo, la fortuna de obtener la libertad a los dos años y dos meses, habiendo sido condenados la mayor parte a penas tan severas como el reo de Benagalbón, Francisco Pérez Segura, que lleva más de cuatro años en prisión y aún no ha alcanzado remisión alguna de la que le fué impuesta.

* * *

El eminente penalista Pacheco, en una de sus inolvidables conferencias pronunciadas en el Ateneo de Madrid durante los años 1839 y 1840, sintetizaba así la que dedicó a tratar de los delitos políticos: «La consecuencia de todo lo expuesto es condenar el crimen político, pero no castigarle duramente, irreparablemente. Otros son los medios, a nuestro parecer, con que se pueden rectificar tantos errores y corregir tantos males.»

En esos medios, sin duda, ponía su pensamiento al discutir en el Congreso el proyecto de ley de la última amnistía, un orador de las derechas, el diputado por Sevilla, señor Rojas Marcos, cuando exclamaba:

«No veo más que un camino, que es completar esta amnistía con una reforma penal. No es que se detenga la amnistía; que la amnistía no sea término, sino principio de una reforma penal que es absolutamente indispensable; porque yo creo, y perdonad que lo diga, que las leyes penales españolas respecto de muchos delitos, de muchos y no de todos, son *excesivas*. Yo creo que nuestras leyes penales están anticuadas, no corresponden a aquella suavidad de costumbres que el mismo Balmes presentaba como característica de las sociedades modernas; y observad que, cabalmente, esa crueldad, ese rigor excesivo de las leyes penales es lo que ha engendrado esta frecuencia en la arbitrariedad del derecho de gracia, porque cuando las leyes son excesivas se busca una válvula de expansión, algo así como un seguro; y un seguro han sido las amnistías periódicas, que arbitrariamente se proponen.»

«De modo que ya tenemos el exceso de las penas como causa, y la arbitrariedad del derecho de gracia como efecto; pero si variáis la causa, el exceso de las penas, dando unas escalas penales más adecuadas a las características de los pueblos modernos, y al mismo tiempo desaparece la arbitrariedad del derecho de gracia para convertirse, como decía en un principio, en una *fórmula de justicia*, llevándolo, articulándolo en el complicado mecanismo de la justicia penal, ¡oh!, entonces no habrá causa, entonces no habrá efecto; entonces no podrán lamentarse unos y otros; entonces podrá venir la pacificación, sin que la templanza pueda alarmar.»

«Y digo más: que *es ideal científico* (si bien no es posible alcanzarlo completo) *el tratamiento individual del delincuente*. Por esto las amnistías, como perdón en masa, aunque sea de una clase, son inferiores jurídicamente al *indulto parcial*. Dicho tratamiento puede y debe ser ordenado científicamente en la reforma de las leyes penales.»

«Invoco aquí hasta los sentimientos de los mismos diputados de la izquierda. Observad que no hay derecho a sostener un régimen de amnistías periódicas y arbitrarias que favorecen sólo a unos cuantos, porque *en las amnistías, por amplias que sean, no entran todos los delincuentes políticos* y están exceptuados todos los delincuentes comunes, y observad,—yo, por lo menos, tengo ese convencimiento,—que están sufriendo penas excesivas muchos hombres, muchos delincuentes comunes, que tienen también derecho a que se suavicen los rigores de la ley.»

No han entrado, no, como reconoce el señor Rojas Marcos, en la actual amnistía todos los penados políticos que han debido entrar, y

el remedio consiste en los indultos parciales que piden como fórmula de justicia hasta las mismas derechas de la política nacional.

La unanimidad es perfecta en este punto.

* * *

Refórmese la legislación; pero, mientras se reforma, no se olvide que, como ya en su tiempo aseguraba el ilustre don Joaquín Francisco Pacheco, «hay inmensamente ahora más delitos políticos que hubo jamás, sin que sea parte para impedirlo todo el mayor rigor que puedan desplegar las actuales leyes. La marcha de la opinión y los sucesos los han creado.»

Confiemos en la fuerza de la opinión que impondrá el indulto para los reos de Benagalbón, de los que se podría decir lo que el ministro de Gracia y Justicia, señor conde de Romanones dijo en el Senado que eran los reos del «Numancia»: un caso típico de indulto.

Esperamos ese indulto parcial, por que no cabe recelar que se deniegue después de cuantas manifestaciones se han hecho en las Cámaras al votarse la ley.

El señor conde de Bugallal, presidente de la Comisión dictaminadora del Congreso, reveló en el debate gran sinceridad, no vacilando en decir:

«Y este es el carácter singular de estos delitos: que en el momento que se producen, en el momento en que el choque se origina en las calles, no hay límite donde no se llegue por parte de los perturbadores y de los que tienen la obligación de reprimirlos; pero cuando las circunstancias pasan o, a lo menos, las pasiones se calman, de parte de unos y de otros hay siempre el propósito y el deseo de que se olvide, de que se esfumen o se atenuen los enconos que se habían puesto de manifiesto en los momentos del choque.»

Y el mismo ministro de la Guerra, general señor Marina, significó igual excelente disposición en estas palabras:

«Al extremo principal ya ha contestado acertadamente la Comisión, porque el caso que presenta S. S. es análogo a otros que han aducido diferentes señores diputados. Sin embargo, S. S. hablaba de sentimientos de benevolencia, de que esos hechos pueden comprenderse en un indulto parcial, y se refería a mí, porque estando, como están, esos hechos castigados por la jurisdicción de Guerra, yo sería el primer ponente en el asunto. Tratándose de sentimientos de benevolencia que siempre tiene el Gobierno gran deseo de manifestar, y aun tratándose de casos como los que cita S. S. no comprendidos en la ley que se discute, si las instancias de indulto se presentan y vienen bien informadas y por el debido conducto, le prometo a S. S. examinarlas

con toda detención para que la gracia alcance a esos desgraciados, pues por mi parte tendría mucho gusto, si no hay nada en contrario que lo impida, en informarlas favorablemente.»

En la sesión celebrada el 24 de Abril último por el Congreso de los Diputados, el presidente del Consejo de Ministros, señor Maura, al hacer el discurso resumen del debate político sobre la contestación al mensaje de la Corona, se expresó, por último, en los siguientes términos:

«Ahora no soy un presidente del Consejo que concita sus huestes contra un pelotón de adversarios, contra nadie. Nosotros, porque hemos venido así, creo que tenemos títulos para pedir a todo el mundo sin excepción, contando más allá del extremo del último banco, desde fuera de la barandilla para acá, todo, hasta la otra barandilla, creo que tenemos derecho a pedir que nos ayudéis, porque no ayudais a unos partidarios contra otros; si nos equivocamos, pedimos vuestras advertencias. Venimos a cumplir nuestro deber: ayudadnos a cumplirlo cumpliendo el vuestro.»

* * *

Programa del Gobierno que presidiera las últimas elecciones generales y al que el actual sucedió, fué la pureza del sufragio; aspiración que el señor Maura, autor de la vigente ley electoral, mantuvo briosa, tenaz, porfiadamente en los últimos años y a la que debe hacer honor desde el poder, es el mejoramiento de las costumbres ciudadanas; exaltación del patriotismo, energía y no abandono, actividad y no deserción en el cumplimiento del deber, todo eso representa en la hora presente el Gobierno nacido en 21 de Marzo de 1918. ¿Pueden los hombres que hoy rigen los destinos del país, mostrarse sordos al clamor del pueblo que pide clemencia para quienes en un momento de extravío, de ofuscación, de locura, si se quiere, llegaron al crimen por la defensa de un derecho, de una convicción, de un ideal?

En otro Gobierno, formado por otros ministros, se comprendería acaso esa pasividad. En el actual Gobierno lo que no se concibe es que uno de los primeros actos que haya realizado después de sancionarse el día 8 de Mayo de 1918 la ley de amnistía, no haya sido aconsejar el ejercicio de la prerrogativa del Jefe del Estado en favor de los reos de Benagabón y de cuantos, por encontrarse en el mismo caso, tienen derecho a esa fundada esperanza de piedad y reparación de pasados errores políticos e injusticias sociales que, al caer en el olvido, contribuirían a que se afiance la paz, se apacigüen los espíritus y se preparen días más venturosos para la libertad y para la Patria.

PEDRO GÓMEZ CHAIX.

The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is argued that a knowledge of the past is essential for a full understanding of the present. The author then goes on to discuss the various factors which have shaped the development of the United States, including the influence of the British, the Spanish, and the French. He also discusses the role of the American people in the creation of the new nation. The paper concludes by stating that the study of the history of the United States is a task of great importance, and that it is one which should be undertaken by all who are interested in the future of the country.

EL CASO DE BENAGALBÓN

El indulto de la firma de la paz

I

Cada vez que los Gobiernos conceden un indulto general (1) o las Cortes decretan una amnistía, se repite invariablemente la misma frase por la grey ministerial: «Ha sido la amnistía más amplia de todas las conocidas, un indulto más generoso que todos los anteriores. Jamás la clemencia en el ejercicio de la prerrogativa regia o la magnanimidad de los Cuerpos Colegisladores rayó a tanta altura.»

No vamos a discutir la exactitud de tales asertos, ni importan al caso estas competencias entre los otorgantes del perdón. Ciertamente que las amnistías e indultos se extienden hoy a sanciones penales que antes no comprendían; pero ello obedece, no a mayor flexibilidad de los poderes públicos, sino a la especial índole de las luchas modernas que van creando nuevas figuras de delitos a medida que la vida es más compleja y más varia. Ni Canalejas en 1910, ni Romanones en 1916, ni Sánchez Toca ahora han aventajado en benignidad a Cánovas o a Sagasta; ni los hombres del día a los políticos de los viejos tiempos de la restauración borbónica. Sánchez Moya y Ferrer fueron fusilados como los sargentos de Numancia y como Ferrándiz y Vellés.

En 17 de Mayo de 1902, siendo presidente del Consejo de Ministros don Práxedes Mateo Sagasta, concedióse un indulto general con motivo de la mayoría de edad del rey, y los artículos 1.º y 2.º de aquella soberana disposición eran idénticos en su redacción a los análogos o correspondientes del real decreto de 12 de Septiembre último otorgando igual gracia con ocasión de la firma de la paz.

Mas entre los preceptos del real decreto de 12 de Septiembre de 1919 que no existían en el de 17 de Mayo de 1902, aparecen los dos siguientes:

(1) Artículos publicados en los números del diario malagueño *El Popular* correspondientes a los días 8, 15 y 22 de Octubre de 1919.

«Art. 3.º Concedo indulto total a los sentenciados por transgresiones castigadas en la ley de 27 de Abril de 1909 sobre coligaciones, huelgas y paro, o con ocasión de las mismas, siempre que no se trate de los delitos comunes *ni del insulto o agresión a la fuerza armada.*»

«Art. 7.º Concedo también indulto total, cualquiera que sea la pena impuesta, a los condenados por delitos comprendidos en el libro II, título II, capítulo primero, secciones segunda y tercera, y capítulo II, secciones primera y tercera, y en los artículos 162, 266, 269, 270 y 273 del Código penal.»

«Igualmente concedo indulto total, cualquiera que sea la pena impuesta, por los delitos de rebelión y sedición y sus conexos, excepto cuando esos delitos hayan sido cometidos por militares prestando servicio en los Cuerpos activos y Secciones armadas. Exceptúanse también los delitos comunes y *los de agresión a la fuerza armada comprendidos en los artículos 253 y 254 del Código de Justicia militar.*»

Estos dos artículos de nueva redacción exceptúan del indulto a los sentenciados por delitos de agresión a la fuerza armada cuando el real decreto de 17 de Mayo de 1902 comprendía a dichos delitos y no los exceptuaba, y es de advertir que el empeño de mantener tal excepción determinó que el mismo actual Gobierno se viera obligado a rectificar su obra y tuviese que decir en la «Gaceta», al día siguiente de publicar el aludido real decreto, que en el artículo 3.º por error se exceptuó el insulto a la fuerza armada, porque de lo contrario no se cumpliría lo ofrecido a los huelguistas de Barcelona.

Se levantó, pues, parte de la excepción contenida en el artículo 3.º, pero no se hizo lo propio con la del artículo 7.º, y de absurdo en absurdo se llegó a la conclusión que se desprende de lo dispuesto en el siguiente:

«Art. 8.º El indulto comprendido en los artículos anteriores no es aplicable a los reos de traición, falsedades, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, parricidio, asesinato, robo o incendio. A los condenados por cualquiera de estos delitos les concedo rebaja de la sexta parte de su condena si sufrieren pena aflictiva, y de la tercera si la sufrieren correccional, salvo si se tratase de la de arresto, respecto de la que el indulto será de la mitad, lo mismo que para la de multa. También concedo rebaja de la sexta parte a *todos aquellos a quienes por razón de pena no les alcancen los beneficios de los artículos que preceden*, entendiéndose la concesión, por lo que hace a las perpétuas, para los efectos del artículo 29 del Código penal.»

Es decir, que los sentenciados por delitos de agresión a la fuerza

armada obtienen indulto, sí, pero sólo de la sexta parte de sus condenas, y se les equipara a los parricidas, traidores, ladrones, falsarios, prevaricadores, incendiarios y asesinos.

No basta que los Códigos, tanto el de Justicia Militar como el penal de la Marina de Guerra castiguen con penas severísimas, casi siempre con la de muerte, a los que insulten de obra a la fuerza armada; no basta que sean juzgados por el fuero de Guerra y por tribunales especiales; es preciso, además, que hasta para los efectos de la gracia de indulto se consideren delincuentes con un grado de perversidad que los coloca en el mismo nivel que aquellos otros empedernidos criminales que la sociedad rechaza de su seno.

Los lectores habrán comprendido que estas observaciones se relacionan con los penados por los sucesos de Benagalbón, y como el caso se presta a un examen prolijo y detenido, continuaremos el estudio de los preceptos legales y de los hechos en otro artículo.

II

Cuando a raíz de la promulgación de la ley de 8 de Mayo de 1918, comentamos en estas columnas el alcance de aquella amnistía y la discusión que el proyecto del Gobierno suscitó en las Cortes, no conocíamos el texto de la sentencia dictada por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en el proceso de Benagalbón.

Tuvimos sólo en cuenta la versión del parte oficial facilitado a la prensa en el Gobierno civil de Málaga. Hoy podemos tomar como base de nuestra argumentación los antecedentes y resultandos mismos sentados en su fallo por el más alto tribunal de la gerarquía militar. Dicen así:

«Con ocasión de celebrarse elecciones para diputados a Cortes en Benagalbón (Málaga) y ante el temor de que se alterase el orden público, fueron concentradas en dicho punto fuerzas de la guardia civil, compuestas del cabo J. A. L. y guardias D. A. S., L. J. S. y A. M. M., quienes, a requerimiento del presidente de la mesa, procedieron a despejar las inmediaciones del colegio electoral, donde se habían aglomerado unas quinientas personas, formando para ello dos parejas, que marcharon en direcciones distintas a fin de disolver los grupos más próximos a la entrada de dicho colegio.»

«Resultando que al practicar esta operación, el guardia A. ordenó a la hoy procesada D. G. V. que se retirase, y que la citada mujer, que ya había intentado desarmar al guardia M., le contestó airada-

mente que ella estaba allí, donde tenía derecho a estar, y que el que debiera irse era él, en cuyo momento sonó un disparo que no se ha logrado puntualizar quién lo hiciese y la D. arremetió furiosa contra el guardia, pugnando por desarmarle con decisión impropia de su sexo, acudiendo en su ayuda su marido E. R. G. y su hijo E. R. G., que salían del colegio electoral, todos los que forcejearon con dicho guardia, hasta que el último, o sea el R. G. le acometió con una navaja de agudo filo, causándole una herida en el cuello, tan profunda que le produjo la muerte a los pocos instantes.»

«Al mismo tiempo que se realizaba esta agresión y a la voz de «a ellos», fueron atacados los demás guardias por otros grupos con armas de fuego, palos y piedras, aisladamente y sin que pudieran prestarse el debido auxilio, ni hacer otro uso de sus armas que algunos disparos que no hirieron a nadie, dando por resultado estas otras agresiones el que tanto el cabo J. A., como los guardias J. y M. rodaran por tierra maltrechos y sin sentido por efecto de las lesiones sufridas, que fueron, entre otras, dos que presentaba el cabo A. en la cabeza, una en la región occipital con bordes desgarrados, y otra de doce centímetros de extensión en el lado derecho, que invirtieron catorce días en su curación; otra que presentaba el guardia M., también en la cabeza, y luxación de la muñeca izquierda que sufrió el guardia J., lesiones ambas que invirtieron en su curación once días.»

«Los amotinados se apoderaron momentáneamente del armamento de los guardias civiles, excepción hecha de el del guardia M., causando la pérdida del cerrojo del fusil del guardia J., pérdida valorada en 10 pesetas con 30 céntimos; y que produjeron en la guerrera y sombrero del guardia A. deterioros tasados en 24 pesetas con 25 céntimos.»

Hemos querido reproducir en su integridad esta parte del expresado documento judicial, porque basta su simple lectura para adquirir la convicción de que en los hechos, tales como se aceptan por el tribunal sentenciador, hubo algo más que un delito de agresión a la fuerza armada, único que se persigue y se pena en la causa: hubo el delito conexo de sedición definido en el artículo 250 del Código Penal común. Fué este delito político lo principal, lo esencial, el origen de todos los sucesos ocurridos, y la agresión una consecuencia dolorosa y lamentabilísima, no un hecho *per se*, sino *accidens*. Ciertamente es que la pena señalada al delito de insulto a la fuerza armada era más grave y en este sentido a la jurisdicción de guerra competía juzgarlo, pero ¿puede por eso prescindirse de la realidad? Allí no se agredió a la fuerza armada sin que precediera toda una serie de hechos que caracterizan la sedición. Allí hubo requerimientos del presidente de la mesa electoral para que se despejara las inmediaciones del colegio electo-

ral. Allí hubo aglomeradas, no trescientas, como decía el parte del Gobierno civil, sino quinientas personas. Allí fué necesario—y nos atenemos siempre al texto de la sentencia del Supremo de Guerra y Marina—disolver los grupos. Allí los amotinados... Y ¿todo esto no es el alzamiento público y tumultuario, de que habla el artículo 250 del Código Penal común? ¿Es que esos hechos característicos de la sedición no tuvieron por resultado que se impidiera violentamente a los individuos de la mesa electoral el libre ejercicio de sus funciones o la libre celebración de las elecciones en aquel distrito, segundo requisito que el mencionado artículo 250 exige para que los que semejantes actos realizan sean considerados reos del delito de sedición?

Con los resultandos de la sentencia a la vista no cabe dudar un momento que se cometieron en Benagalbón dos delitos conexos, el de sedición primero, el de agresión a la fuerza armada después.

El artículo 7.º del real decreto de 12 de Septiembre último, reproduciendo el concepto del número 3.º del artículo 1.º de la ley de 8 de Mayo de 1918, establece en su párrafo segundo: «Igualmente concedo indulto total, cualquiera que sea la pena impuesta, por los *delitos de rebelión y sedición y sus conexos*, excepto cuando esos delitos hayan sido cometidos por militares prestando servicio en los Cuerpos activos y Secciones armadas. Exceptúanse también los delitos comunes y los de agresión a la fuerza armada comprendidos en los artículos 253 y 254 del Código de Justicia militar.»

Y como en lo substancial la redacción del artículo 7.º del real decreto de 12 de Septiembre de 1919 es idéntica a la del número 3.º del artículo 1.º de la ley de 8 de Mayo de 1918, y ambos preceptos deben interpretarse de igual modo, nos limitamos a recordar las palabras pronunciadas en el Congreso el 4 de Mayo de 1918 por el señor Goycoechea en nombre de la Comisión dictaminadora del proyecto convertido a los pocos días en ley:

«Se amnistian los delitos de rebelión y sedición y sus conexos; con lo cual queremos decir que *los choques con fuerza armada, cuando sean cualificativos, constitutivos, característicos de los delitos de rebelión y sedición, están amnistiados; que lo están asimismo los delitos conexos*, entendiéndolo por tales los que define el artículo 17 del Código de Justicia militar, es decir los que han servido de medio para la ejecución de otro delito o los que se han realizado colectivamente por las personas responsables. ¿Qué es la excepción? Pues exclusivamente el delito específico, aislado de insulto y agresión a fuerza armada, caracterizado y definido en los artículos 253 y 254 del Código de Justicia militar.»

«Cuando en la carpeta del proceso aparezca escrito *«rebelión, sedición y sus conexos»*, el delito habrá quedado amnistiado por virtud de la promulgación de esta ley; pero cuando en la carpeta del proceso lo que aparezca sea *«insulto a fuerza armada»*, castigado en los artículos 253 y 255 del Código de Justicia militar, el hecho no puede ser objeto de amnistía, porque es un delito no político, específicamente distinto, castigado aparte en los preceptos del Código de Justicia militar.»

De suerte que los reos de Benagalbón no se consideraron incluidos en la amnistía de 1918 ni en el indulto general de ahora, porque no habiéndose instruido el proceso sino por el delito de agresión a la fuerza armada, no se calificó el de sedición en el proceso, aunque de hecho hubo sedición, y así se demuestra en los resultandos de la propia sentencia del Consejo Supremo de Guerra.

¿No se declaró en el Parlamento que los delitos exceptuados de la amnistía eran exclusivamente los de insulto o agresión a la fuerza armada *aislados*?

¿No se dijo que los choques con fuerza armada se comprendían en la amnistía cuando fueran cualificativos, constitutivos o característicos de la rebelión y sedición? ¿Puede admitirse que, si no fué choque de esa clase el insulto a fuerza armada ejecutado en Benagalbón, se amnistie e indulte lo más, y no se indulte ni amnistie lo menos?

Respecto a lo que aparezca en la carpeta del proceso, detalle es de tal insignificancia que no cabe supeditar a él cosa tan seria como la libertad o la permanencia en presidios de hombres que cumplen penas perpétuas o de veinte o quince años de duración. Habría que revisar, en todo caso, los sumarios y plenarios de los procesos.

Los penados de Benagalbón quedaron excluidos de la amnistía de 8 de Mayo de 1918 y tampoco les alcanzará ahora, por una verdadera sutileza, el indulto general de 12 de Septiembre de 1919. Pero un alto sentimiento de equidad, superior a toda ley escrita, impone la inmediata concesión de un indulto parcial a favor de esos reos.

Además de todo lo expuesto, hay en los resultandos transcriptos de la sentencia una circunstancia que no se apreció en el proceso: la del marido, Enrique Roldán González, y la del hijo, Enrique Roldán Gómez, que acuden en ayuda de Dolores Gómez Villalba, esposa de aquél y madre de éste respectivamente: ambos salían del colegio electoral, al ver que Dolores arremetía contra el guardia, *después de haber sonado un disparo sin que se lograra puntualizar quien lo hiciera*. Todos forcejean con el guardia y entonces es cuando el hijo Enrique Roldán Gómez causa al guardia la herida en el cuello. Y esta circuns-

tancia que no pretendemos sea eximente, pero, sí, atenuante y atenuante muy cualificada, bien merece que la examinemos aparte.

III

La sentencia dictada en 12 de Mayo de 1915 por el Consejo Supremo de Guerra y Marina condenando a los reos de Benagalbón, no apreciaba en los autores ninguna circunstancia modificativa de responsabilidad. Sólo el Consejo de guerra ordinario declaró «como tales para todos los procesados la gran transcendencia de los hechos y el daño producido.»

El Código de Justicia militar, aunque no tan explícito y terminante en este punto como el Código Penal común, admite, sin embargo, la existencia de circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes, disponiendo respecto de las primeras que los Tribunales militares aprecien como causas de exención de responsabilidad criminal las que, en cada caso, juzguen pertinentes del Código Penal ordinario, sin que pueda declararse aquélla por ninguna otra causa que no se halle consignada en dicho Código.

Y a continuación el artículo 173 del Código de Justicia militar dice: «Para la apreciación de las circunstancias atenuantes o agravantes de los delitos comprendidos en esta ley obrarán los Tribunales según su prudente arbitrio, tomando en cuenta el grado de perversidad del delincuente, la transcendencia que haya tenido el delito, el daño producido o que hubiere podido producir con relación al servicio, a los intereses del Estado o a los particulares, y la clase de pena señalada por la ley.»

No enumera este Código, es cierto, como el Penal común y el mismo Penal de la Marina de Guerra, todas y cada una de las circunstancias atenuantes, pero deja al prudente arbitrio de los Tribunales militares su estimación; y establecidos los resultandos que reproducíamos en nuestro artículo anterior, sentadas las afirmaciones que en ellos se contienen, surge de los mismos por modo imperioso la eximente incompleta del que obra en defensa de la persona de su cónyuge y de su ascendiente, por lo que afecta a Enrique Roldán González y Enrique Roldán Gómez, o cuando menos, la de haber obrado ambos por estímulos tan poderosos que naturalmente produjeran arrebató y obcecación.

Reconoce como hecho probado en su sentencia el Consejo Supremo de Guerra y Marina que, tras algunas palabras cambiadas entre

el guardia A. y la procesada Dolores Gómez Villalba, «sonó un disparo que no se logró puntualizar quién lo hiciera.» Varios testigos aseguran que estos disparos partieron de la guardia civil, y ello es lo presumible, puesto que nadie en la causa habla de paisano alguno que hiciera uso de arma de fuego. Otros manifiestan que un disparo, partiera de quien partiese, se dirigió contra la procesada Dolores Gómez Villalba, atravesándole el vestido. De todos modos lo que resulta indubitado es que el disparo fué anterior al acto de arremeter Dolores contra el guardia, y que uno y otro hecho precedieron la salida de Roldán y su hijo del colegio electoral.

¿Es que, al proceder así, no obraban Enrique Roldán González en defensa de su esposa y Enrique Roldán Gómez en la de su madre, porque faltaba la agresión ilegítima, base, según la jurisprudencia, de toda eximente completa o incompleta de responsabilidad, y porque no se admite agresión en la fuerza pública que rechaza a unos amotinados? Pues en ese supuesto debió estimarse la atenuante de obcecación y arrebató.

Multitud de casos resueltos por el Tribunal Supremo consagran esta doctrina. En 3 de Marzo de 1890 el Supremo casó una sentencia de la Audiencia de Madrid por indebida aplicación del número 7.º del artículo 9.º y regla 4.ª del artículo 82 del Código Penal.

«La cualidad de ser hermano el recurrente del que veía en lucha agarrado con otro legítima—decía el Supremo en la mencionada fecha—por sí solo la circunstancia atenuante que se pretende, porque necesariamente el cariño y vínculo tan próximo racional y legalmente demuestran la causa estimulante suficiente a producir los efectos de obcecación y arrebató que la ley preceptúa para su aplicación, y que debió tener positiva influencia en la comisión del delito.»

Y si los Tribunales del fuero común entienden que es estímulo bastante para producir arrebató el de un padre y un hijo, que, sin provocación alguna de su parte, acuden en auxilio de su esposa y madre cediendo a generosos impulsos de la naturaleza humana que toda conciencia recta debe respetar, ¿porqué los Tribunales del fuero de guerra no aplicaron el artículo 173 del Código de Justicia militar, teniendo en cuenta esa atenuante cualificadísima? Apreciaron, en cambio, con notorio y evidente error, «la gran transcendencia de los hechos y el daño producido como circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en los reos de Benagalbón» cuando la transcendencia más o menos grande de los hechos y el daño que pudieran producir, serán causas que influyan en la estimación de tal o cual circunstancia agravante, pero nunca determinan ni constituyen por sí propias una modificativa de responsabilidad, como tampoco la clase de pena seña-

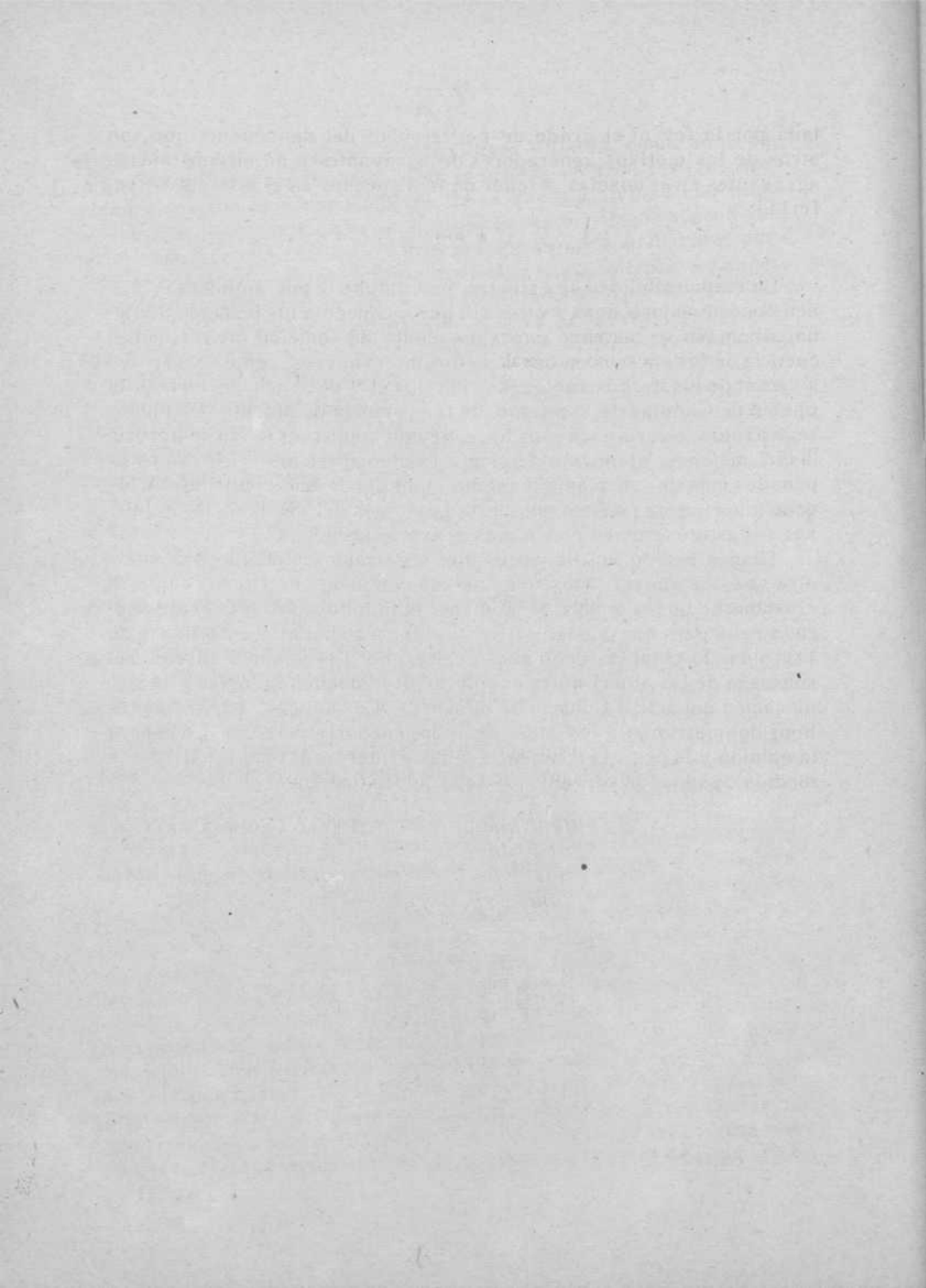
tada por la ley ni el grado de perversidad del delincuente que son otros de los motivos generadores de agravantes y no circunstancias agravantes en sí mismas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 173 referido.

* * *

La responsabilidad se extingue por indulto y por amnistía, y vienen concediéndose unas y otros sin que alcancen a los penados de Benagalbón. No se instruyó causa por delito de sedición civil a consecuencia de los sucesos en que aquéllos intervinieron, como se instruyó a virtud de los hechos análogos ocurridos el 9 de Abril de 1911 en el pueblo de Canillas de Aceituno, de la provincia de Málaga. De haberse instruido, estarían los reos hace tiempo amnistiados. No se apreció la circunstancia atenuante descripta y debió apreciarse. Llevan estos penados más de cinco años y medio cumpliendo sus condenas. A los ocho años fueron puestos en libertad los reos del «Numancia» a quienes se castigó también con la más grave de las penas.

Hemos pedido un día y otro día, seguiremos pidiendo una vez y otra vez que ambos casos se resuelvan con idéntico criterio y que, si el Gobierno no les otorga de momento el indulto total, les rebaje ahora la pena para que puedan ser restituidos a su hogar el 8 de Marzo de 1922, cuando cumplan ocho años de presidio. Lo demanda la equidad soberana de las almas antes que la ley. Lo imponen la lógica y la significación del actual Consejo de ministros. Lo suplican siete inocentes hijos del matrimonio Roldán, casi todos menores de edad. Lo espera la opinión y lo exige la conciencia pública interesadas por igual en esta medida de sana, de suprema, de reparadora justicia.

PEDRO GÓMEZ CHAIX.



CERTIFICADO

Don Antonio Guerrero Guerrero, Licenciado en Derecho y Secretario de la Junta provincial del Censo electoral.

Certifico: que en la Sección única del segundo distrito de Benagalbón no existe acta de escrutinio y, sí, un certificado del mismo que dice como sigue:

«Elección del término municipal de Benagalbón.—Distrito segundo.—Sección única.

El Presidente, Adjuntos e Interventores de la Mesa electoral de la expresada sección certifican: Que el escrutinio de la votación de Diputados a Cortes, verificada hoy en dicha Sección o colegio, ha dado el resultado siguiente:

Número de electores de esta Sección: trescientos diez y ocho.

Id. de papeletas leídas: ciento treinta y nueve.

Nombre de los candidatos.—Número de votos que cada uno de éstos ha obtenido (1).

Don Pedro Gómez Chaix, ciento veinte y nueve, 129.

Don Emilio Menéndez Pallarés, ciento veinte y nueve, 129.

Don José Estrada Estrada, diez, 10.

Don Félix Saenz Calvo, diez, 10.

Y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 45 de la ley electoral de 8 de Agosto de 1907 firmamos la presente en Benagalbón a ocho de Marzo de mil novecientos catorce.

El Presidente, *Antonio Rando*.—Los Adjuntos e Interventores, *José Rando, Antonio Rando, Francisco García, José Díaz, Francisco García, José García, Juan Arias, Francisco Rueda, Antonio Díaz, José Pérez Lozano, Antonio Serrano*» (2).

(1) En anteriores elecciones, por ejemplo, en las de Diputados provinciales de 9 de Marzo de 1913, el candidato don Pedro Gómez Chaix obtuvo 131 votos y el candidato don Adolfo Gómez Cotta 11 ídem, observándose análoga proporción.

(2) Los firmantes don José Rando y don Antonio Rando eran adjuntos; don Francisco García, don José Díaz, don Francisco García y don Juan Arias interventores de los candidatos señores Estrada y Saenz Calvo, y don José García, don Francisco Rueda, don Antonio Díaz, don José Pérez Lozano y don Antonio Serrano interventores de los candidatos señores Menéndez Pallarés y Gómez Chaix.

Y para que conste expido la presente con el Visto Bueno del Ilmo. Señor Presidente en Málaga a ocho de Junio de mil novecientos catorce.—*Antonio Guerrero*.—V.º B.º El Presidente, *G. Valdecasas*.—Hay un sello.

INDULTOS

Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a este Ministerio en 30 de Octubre último, promovida por el recluso en la prisión provincial de Málaga, Antonio Anaya López, en súplica de indulto del resto de la pena de cinco años de prisión correccional que, por el delito de ejecutar actos con tendencia a ofender de obra a fuerza armada, se halla extinguiendo, el rey (q. G. g.), de acuerdo con lo informado por V. E. en su citado escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual, se ha servido acceder a la petición del interesado.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de Diciembre de 1916.—*Luque*.

Señor Capitán general de la segunda región.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

(Del *Diario Oficial del Ministerio de la Guerra* de 2 de Enero de 1917.)

Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a este Ministerio con su escrito de 30 de Octubre último, promovida por el recluso José Garrido García, en súplica de indulto del resto de la pena de cinco años de prisión correccional que, por el delito de ejecutar actos con tendencia de ofender de obra a fuerza armada, extingue, el rey (q. G. g.), de acuerdo con lo informado por V. E. en su citado escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes próximo pasado, se ha servido acceder a la petición del interesado.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de Enero de 1917.—*Luque*.

Señor Capitán general de la segunda región.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

(Del *Diario Oficial del Ministerio de la Guerra* de 10 de Enero de 1917.)

Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a este Ministerio, con escrito de 17 de Abril último, promovida por el recluso en la prisión provincial de Málaga José Roldán Martín, en súplica de indulto del resto de la pena de seis años de prisión correccional, que sufre por el delito de insulto de obra a fuerza armada, el rey (q. G. g.), de acuerdo con lo informado por V. E. en su citado escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual, se ha servido acceder a la petición del interesado.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de Junio de 1917.—*Primo de Rivera*.

Señor Capitán general de la segunda región.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

(Del *Diario Oficial del Ministerio de la Guerra* de 24 de Junio de 1917.)

Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio por el recluso en la prisión provincial de Málaga José Díaz Villalba (1), en súplica de indulto del resto de la pena de seis años de prisión correccional, que sufre por el delito de ejecutar actos con tendencia a ofender de obra a fuerza armada, el rey (q. G. g.), de acuerdo con lo informado por V. E. en su escrito de 16 de Abril último y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próximo pasado, se ha servido acceder a la petición del interesado.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de Junio de 1917.—*Primo de Rivera*.

Señor Capitán general de la segunda región.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

(Del *Diario Oficial del Ministerio de la Guerra* de 24 de Junio de 1917.)

(1) En la sentencia que dictó el Consejo Supremo de Guerra y Marina en el proceso por los sucesos de Benagalbón se condenaba a nueve reos: Enrique Roldán González, Dolores Gómez Villalba y Enrique Roldán Gómez a la pena de muerte, Francisco Pérez Segura a nueve años de prisión mayor, José Díaz Villalba y José Roldán Martín a seis años de prisión correccional y Antonio Anaya López, José Garrido García y Rafael Pérez Lozano a cinco años de prisión correccional.

De los cinco últimos, Rafael Pérez Lozano falleció en la prisión provincial de Málaga y los restantes fueron indultados del resto de sus penas por estas reales órdenes al cumplir la mitad de duración de la que cumplían.

INDULTOS

Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada a S. M. por el penado Gonzalo Moreira González (1), en solicitud de indulto, oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina, visto el art. 12 de la ley de 18 de Junio de 1870 y tomando en consideración la conducta observada por el referido recluso en el penal de Cartagena donde se encuentra, S. M. el rey, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha dignado concederle la conmutación de la pena de reclusión perpétua que se halla sufriendo por la de ocho años y un día de presidio.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 de Enero de 1916.—*Miranda*.

Señor Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.

Señor Comandante general del apostadero de Cádiz.

(Del *Diario Oficial del Ministerio de Marina* de 16 de Febrero de 1916.)

LOS PRESOS DE BENAGALBÓN ¿SON INOCENTES?

Durante la reciente visita que hice al Penal de Cartagena, tuve ocasión de hablar detenidamente con los penados por los sucesos de Benagalbón; y en el curso de aquella conversación, oí cosas de tal importancia, repetidas cien veces y dichas con lágrimas en los ojos y con acento de tal nobleza y verdad, que me dí cuenta de que en aquel momento había contraído un deber, como periodista y como hombre honrado.

No satisfecho con mi propio convencimiento, apelé a otras personas que se hallaban próximas; el abogado cartagenero don José García Vaso, el periodista madrileño señor López Baeza, Campúa el fotógrafo de Prensa Gráfica, y no sé si Alfonso también, oyeron lo mismo que oí yo y obtuvieron el mismo convencimiento de que aquellos hombres son inocentes.

—Somos inocentes—decía el viejo sollozando.

—No se apure, padre, y, sobre todo, ¡no llore!—exclamaba el hijo abrazándole y procurando ocultar el llanto que también acudía a sus ojos.

(1) Iguales reales órdenes en la misma fecha se dictaron a favor de Eduardo Gutiérrez Gutiérrez, Francisco Bea Ortiz, Jesús Ara Jerez, Vicente Díaz Rey y Francisco Camos Brage, todos condenados a pena de muerte por la sublevación del «Numancia.»

—No basta eso; no basta decirlo—me atreví a objetar—; es preciso probarlo: en Benagalbón apareció un guardia civil muerto; ustedes estaban por allí... Si ustedes son inocentes, ¿quién le mató?

—¿Quién?—exclama el padre serenándose de pronto y adoptando una actitud resuelta y enérgica. Su hijo le hace callar.

—Padre—le dice—; eso es perder a otro hombre; cálese y tenga esperanza; o es verdad que no hay justicia, o nosotros saldremos de aquí.

—¡Sí... sí!... ¡Justicia!—exclama el viejo volviendo a gemir—. Si yo me muero aquí, nada me importa; si tu madre muere también en presidio, ¡qué le vamos a hacer! Pero tú... ¡tú, con tus veinticuatro años!...

Y al cabo de largas reflexiones del viejo que vencieron al fin la resistencia del hijo, nos contó aquél todo.

He aquí ahora lo que oí y diga luego el Gobierno si procede o no la revisión de esa causa:

Enrique Roldán, el padre, de cincuenta y seis años, en Marzo de 1914, fué nombrado, contra su voluntad, apoderado para las elecciones que se celebraban el día de los sucesos, y al ocurrir éstos en la calle, él se hallaba dentro del Colegio; dice que durante la vista lo manifestaron así algunos testigos.

Se trataba, según en el pueblo era voz pública, de escamotear el acta; el alcalde, don Salvador Arias, tenía que servir al cacique a toda costa. Llegada la hora del escrutinio, el pueblo en masa acudió al Colegio electoral. El alcalde, alarmado, ordenó a la guardia civil que hiciese fuego para ahuyentar a los manifestantes; y la benemérita, obedeciendo, disparó sus fusiles al aire. El pueblo entonces, lejos de huir, se echó sobre los guardias, y uno de éstos cayó muerto: había recibido un terrible tajo en el cuello.

La mujer de Roldán (que también extingue hoy la pena de cadena perpetua) había venido al pueblo desde su casa, situada a gran distancia, para ver a una nietecita suya enferma, y al oír los disparos temió que le hubiera ocurrido algo malo a su marido, y corrió a su encuentro.

Eso fué lo ocurrido.

El pueblo, comprometido todo o casi todo él, convino en no decir nada de nada ante el Juzgado; y los testigos, aunque supieran que los Roldán, marido, mujer e hijo eran inocentes, callaron, y quienes sabían hasta quién era el autor de la muerte del guardia, lo callaron también.

Por otra parte, los tres penados de hoy, recibieron la promesa de que los indultarían pronto, y aunque conocían al autor del crimen, callaron también, y prefirieron sacrificarse antes que denunciar a un convecino.

Pero el tiempo ha transcurrido: llevan cuatro años en presidio, y lejos de llegar el indulto, se ha esfumado ya hasta la esperanza de obtenerlo. Y el padre se rebela contra la continuación del sacrificio y llega hasta a decir el nombre del autor de la muerte del guardia.

Yo he procurado informarme de si había alguna esperanza de que esos des-

dichados merecieran el indulto; esto mismo seguramente ha detenido también la pluma del señor López Baeza. Si esa esperanza existiera, bien sabe Dios que yo no escribiría estas líneas; pero no existe, y aun a trueque de que otro hombre vaya a la cárcel, creo cumplir con un deber de conciencia publicando estas notas y contribuyendo con ellas a que salgan a la calle tres inocentes, por quienes lloran siete hijitos que hoy viven de caridad.

¿Nombre del autor de este crimen político? No llego a tanto; venga la revisión y que el juez se encargue de recoger de labios de los interesados lo que yo recogí, y de averiguar si es cierto.

Si mi testimonio no basta, ahí están los de quienes conmigo oyeron. Acaso los cuatro diputados del Comité de huelga, durante su permanencia en el Penal, obtuvieron la misma convicción de la inocencia de esos penados; tal vez los señores Prieto y Barriobero, que también hablaron con ellos, puedan reforzar la petición de que sea revisado el proceso.

Ahora que el Gobierno diga lo que procede ante un caso de esta naturaleza.

EDUARDO RUIZ DE VELASCO.

(De «El Sol», Madrid, de 21 de Mayo de 1918.)

AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Málaga 28 de Noviembre de 1919.

Excmo. Señor Presidente del Consejo de Ministros.—Madrid.

Ayuntamiento Málaga en sesión ordinaria celebrada hoy acordó por unanimidad elevar respetuosa súplica Gobierno conceda a reos proceso Benagalbón Enrique Roldán González, su mujer Dolores Gómez Villalba y su hijo Enrique Roldán Gómez conmutación pena reclusión perpetua que hállanse sufriendo por la de ocho años presidio, invocando para ello precedente de igual conmutación concedida por reales órdenes de 23 Enero 1916 a seis reos «Numancia».—Alcalde *Manuel Romero Raggio*.

Málaga 29 de Noviembre de 1919.

Excmo. Señor Presidente del Consejo de Ministros.—Madrid.

La Comisión provincial en sesión de hoy y por unanimidad acordó dirigirse al Gobierno para suplicarle respetuosamente conmute a los reos del proceso Benagalbón la pena perpetua que sufren por la de ocho años de presidio, como ya se hizo con seis reos del «Numancia».—El Vicepresidente, *Enrique Calafat*.



